

64ª REUNION — Continuación de la 29ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL)
SEPTIEMBRE 10 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Teodosio F. Pizarro

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
AGUIRRE CÁMARA, José
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
ÁVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo F.
BACHINI, J. A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidoro G.
BALBONA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Ángel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Ángel R.
CALABRESE, Pablo
CALVÓ, Carlos Alberto
CÁRDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASTELLAR, Miguel A.
CENTENO, José Isaac
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CHEBLE, Francisco R.
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERÓ, Miguel P.
DÍAZ, Diógenes C.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.

DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, José M.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GARAY, Fermín J.
GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRE, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LILJESTHROM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
LLORENS, Héctor
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSCO, Adalberto O.
MARTÍNEZ LAYMONDA, Rafael J.
MÉNDEZ DOYLE, Abel Victor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSITANI, Héctor Francisco
OCAMPO, Carlos E.

OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Ángel H.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ GALLART, Alcides B.
PERNASETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PUCADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Welchor S.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENÉ, José María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
ROBERTO, Mario
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor R.
SANTA MARÍA, Oscar Hipólito
SARRULLE, Oscar E.
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLARI, Juan Antonio
TACHELLA, Elberto S. J.
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TROCCOLI Antonio A.
VACA LOÑO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTÉ DE PÉREZ TORT, Lidia
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
VINALS, Fernando J.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTE, EN COMISION:

LEÓN, Luis Agustín

AUSENTE, CON LICENCIA:

CUERDO, Ramón

AUSENTES, CON AVISO:

AVETA, Francisco O.
CANTONI, Angel Serafin
CASAS, David Jorge
CATALAN, Guillermo
CORAL, Juan Carlos
FIGUEROA, Jaime Hernán

GALEANO, Roberto A.
GARCÍA, Horacio
LESCANO, Edmundo A.
MARTINEZ, Ramón S.
MASSOLO, Eduardo A.
MERCADO, José Ignacio
MUSACCHIO, Vicente M.
NOUGUES, Isaias J.
PALACIOS, Alfredo L.
PEREZ, Raúl
REQUENA, Raúl María

ROMEU VERDIER, Gabriel
SCALITER, Juan
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
TARULLI, Pasqual

AUSENTES, SIN AVISO:

ANTÓN, Luis
COGGIOLA, Luis S.
P. ÑA Y LILLO, Silvestre

SUMARIO

1.—Manifestaciones. (Pág. 3370.)

2.—**Legislación represiva.** Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la materia. (Pág. 3370.)

3.—**Mociones:** del señor diputado **Bobillo** en el sentido de que se autorice a la **Presidencia** a girar a las respectivas comisiones los asuntos entrados y del señor diputado **Schaposnik** de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14. Se aprueban. (Pág. 3402.)

4.—Apéndice:

Asuntos entrados:

I.—Poder Ejecutivo:

Mensaje y proyecto de ley: reimplantación del grado de inspector mayor en los cuadros del personal superior de la Policía Federal. (Pág. 3402.)

II.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Pág. 3405.)

III.—Comunicaciones de comisión. (Página 3405.)

IV.—Dictámenes de comisión. (Pág. 3405.)

V.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 3406.)

VI.—Peticiónes particulares. (Pág. 3407.)

VII.—Proyectos de ley:

1.—Del señor diputado **Rois**: modificación del escalafón de empleados de bancos particulares. (Pág. 3408.)

2.—Del señor diputado **Muratori**: pensión a doña Felisa del Tránsito Romero de de la Fuente. (Pág. 3409.)

3.—Del señor diputado **Maggi y otro**: creación de la Corporación del Delta. (Pág. 3410.)

4.—De los señores diputados **Ortiz Hernández y Fiol**: declaración de feriado nacional el 11 de septiembre. (Pág. 3415.)

5.—Del señor diputado **Nougués**: aumento de pensión a la señora Rosa Serena de Vaccaro. (Pág. 3415.)

6.—Del señor diputado **Nougués**: derogación del decreto ley 6.677/63, referente a la marina mercante. (Página 3415.)

7.—Del señor diputado **Pizarro y otros**: declaración del Día del Empleado de Comercio. (Pág. 3417.)

8.—Del señor diputado **Pizarro y otro**: declaración de días laborables a los lunes y martes de carnaval. (Página 3417.)

9.—Del señor diputado **Di Leo**: seguro de salud obligatorio. (Pág. 3417.)

10.—Del señor diputado **Bogliano**: subsidios al Colegio Santa María de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. (Pág. 3421.)

11.—Del señor diputado **Bravo (C. A.)**: pensión a don Mario Bartolini. (Página 3421.)

12.—De los señores diputados **Ortiz Hernández y Fiol**: pensión al doctor Juan Bautista Lafourcade. (Página 3422.)

13.—Del señor diputado **Lescano**: subsidio al Tiro Federal de La Banda, Santiago del Estero. (Pág. 3422.)

14.—De los señores diputados **Massolo y Solari (E. A.)**: importe de las dietas que hubieran correspondido al ex diputado nacional Manuel Martín Mujica. (Pág. 3423.)

15.—Del señor diputado **Lejarraga y otros**: modificación de la ley 1.420, de educación común. (Pág. 3423.)

16.—Del señor diputado **Lejarraga y otros**: reforma del decreto ley 6.300-58, sobre el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria. (Pág. 3423.)

17.—Del señor diputado **Lejarraga y otros**: modificación de la ley 15.240, sobre el Consejo Nacional de Educación Técnica. (Pág. 3423.)

18.—Del señor diputado **Rodríguez**: construcción de un edificio para Correos y Telecomunicaciones en Inrville, Córdoba. (Pág. 3425.)

ción suministrada a la Honorable Cámara por el señor ministro del Interior. (Pág. 3497.)

27.—Del señor diputado **Díaz**: pedido de informes sobre elecciones en la Federación de Empleados de Comercio (Pág. 3497.)

28.—Del señor diputado **Gómez Machado** y **otro**: pedido de informes referentes a los resultados de la investigación que se habría practicado en el Servicio de Informaciones Navales. (Pág. 3498.)

29.—Del señor diputado **Gómez Machado** y **otro**: pedido de informes sobre el señor Alberto Falcionelli. (Página 3499.)

30.—Del señor diputado **Pereira** y **otros**: pedido de informes acerca del asalto a la estación de ómnibus de la empresa Emilio Castro S. A., en la Capital Federal. (Pág. 3499.)

IX.—Proyectos de declaración:

1.—Del señor diputado **Bogliano**: creación del Consejo Federal de Ferrocarriles. (Reproducido.) (Página 3500.)

2.—Del señor diputado **Grau**: creación del ciclo superior en la Escuela Nacional de Educación Técnica de Veinticinco de Mayo, Buenos Aires. (Pág. 3500.)

3.—De la señora diputada **Valente de Pérez Tort**: fondos para el Consejo Nacional del Menor. (Pág. 3501.)

4.—Del señor diputado **Fernández Mendy**: construcción de un tanque elevado para provisión de agua potable a los habitantes de Dique Luján, Buenos Aires. (Pág. 3501.)

5.—Del señor diputado **Rodríguez**: construcción de un edificio para Correos y Telecomunicaciones en Leones, Córdoba. (Pág. 3502.)

6.—Del señor diputado **García Leyenda**: normalización institucional de la provincia de Santa Cruz. (Página 3502.)

X.—Proyecto de resolución (fundamentos verbales —artículo 154 del reglamento—):

Del señor diputado **Herrera**, autorización para editar en la Imprenta del Congreso de la Nación la obra *Oda a la Patagonia*, de Richard Bryh Williams. (Pág. 3502.)

—En Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre de 1964, a la hora 15 y 50:

1

MANIFESTACIONES

Sr. Abalo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pizarro). — Tiene la palabra el señor diputado Abalo.

Sr. Abalo. — Señor presidente: ha llegado a mi conocimiento que la Comisión de Legislación Penal se encuentra reunida para tratar de llegar a un acuerdo respecto del diferendo producido en la tarde de ayer con relación al despacho sobre derogación de la legislación represiva. En consecuencia, hago indicación de que se siga llamando hasta las 16 y 30, dado que ése es, más o menos, el tiempo que se calcula necesario para producir despacho.

Sr. Presidente (Pizarro). — La Presidencia informa que hay 97 señores diputados en la casa, y que, efectivamente, la Comisión de Legislación Penal se encuentra trabajando. Si hay asentimiento, se continuará llamando hasta las 16 y 30.

—Asentimiento.

—Se continúa llamando.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

—A la hora 16 y 45:

2

LEGISLACION REPRESIVA

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en particular de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, contenidos en el orden del día 88, relacionados con la derogación de decretos y decretos leyes que contengan sanciones penales sin validez constitucional (1).

Se reanuda la consideración del artículo 39. Tiene la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión ha proyectado el siguiente inciso nuevo del artículo 213 bis: «El que públicamente instigare o ejecutare actos que provoquen la lucha o segregación de sectores sociales fundados en motivos religiosos o raciales.»

Para llegar a esta redacción se ha tenido presente que el proyecto del Poder Ejecutivo proponía la redacción del artículo 213 bis en el tí-

(1) Véanse los Diarios de Sesiones del 2, 3, 4 y 9 de septiembre de 1964, páginas 3053, 3236, 3290 y 3336 respectivamente.

tulo VIII del Código Penal, que trata de los delitos contra el orden público, con la denominación de «Otros atentados contra el orden público.» O sea, que el bien jurídico tutelado, la preocupación fundamental, era el mantenimiento del orden y de la tranquilidad públicos; vale decir, era una disposición tendiente a evitar la alteración del orden público. Por eso, en la redacción definitiva que da la comisión se establece que el delito debe ser ejecutado públicamente, ya sea la instigación o la ejecución, y con actos tendientes a provocar la lucha, o sea, la alteración del orden público. La finalidad es el mantenimiento de la paz y de la tranquilidad públicas.

En cuanto al agregado de «o segregación de sectores sociales», debe entenderse que la segregación importa una diferenciación. La discriminación de que hablaba el proyecto originario del Poder Ejecutivo debe hacerse con afán peyorativo, no la simple diferenciación tendiente a distinguir una religión o raza de otra. El afán peyorativo, la intención, es fundamental en esta figura que estamos creando, siempre con la tendencia a alterar el orden público.

No están comprendidos los hechos privados, las cuestiones de culto, de la educación, o de la vida de los hombres que no preocupan fundamentalmente el orden público del país.

Esta es una innovación que se hace en la República Argentina. Tanto es así, que normas de esta naturaleza ni siquiera fueron establecidas en el código alemán y sólo figuran en el proyecto del año 1958 de ese país. La Convención Mundial de Genocidio reunida el 9 de diciembre de 1948, como se señaló acertadamente en el seno de la comisión, no se atrevió a aconsejar la inclusión de normas de tal naturaleza para simples acontecimientos que no importaran homicidios. De tal modo es así, que lo único que se ha penado en los países que han tenido en su interior grandes luchas raciales es el genocidio.

Sr. Schaposnik. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Schaposnik. — Me parece que el señor diputado está un poco atrasado de información. El artículo 9º de la declaración de las Naciones Unidas sostiene totalmente lo contrario de lo que está informando el señor diputado. Incluso reclama la incriminación de la discriminación racial, que tanto fue discutida ayer. Y se trata de una enmienda propuesta por la delegación argentina en el mes de noviembre de 1963, es decir, estando en ejercicio el actual Poder Ejecutivo nacional.

Si el señor diputado lo permite, voy a leer el artículo 9º de esa declaración, incluso porque la comisión ha suprimido la agravante que nosotros pedimos ayer y que fue aceptada de común acuerdo por todos, por la cual se incriminaba a las instituciones de tipo totalitario y que es, precisamente, el fundamento de un proyecto sobre

disolución de entidades del tipo de Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista, que ahora quedan prácticamente sin incriminación.

El artículo 9º de la declaración de las Naciones Unidas dice así: «1. — Toda clase de propaganda y organizaciones basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de un color u origen étnico que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial en cualquier forma serán severamente condenadas.

»2. — Toda incitación a la violencia o actos de violencia cometidos por individuos u organizaciones contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico deben ser considerados como una ofensa contra la sociedad y punibles con arreglo a la ley.

»3. — Con el fin de realizar los propósitos y principios de la presente declaración, todos los Estados deben tomar medidas inmediatas y positivas, incluidas las legislativas y otras, para enjuiciar y, llegado el caso, para declarar ilegales las organizaciones que promuevan o inciten a la discriminación racial, al uso de la violencia o que usen de la violencia con propósitos de discriminación basados en raza, color u origen étnico.»

Creo que nos hemos quedado cortos y que ni siquiera vamos a sostener lo que el Poder Ejecutivo ha defendido en las Naciones Unidas, porque el texto que acabo de leer es una enmienda propuesta por la delegación argentina como transacción para lograr el voto por unanimidad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Cuando yo me referí al proyecto del código alemán y a la Convención Mundial de Genocidio de 1948 dije claramente que no se habían establecido como normas en los códigos penales. Que las Naciones Unidas en sus declaraciones aconsejen, como lo hacen, y que en alguna medida los países deban cumplir esas indicaciones es una cuestión muy diferente a que una norma del Código Penal de un país al que yo me he referido lo establezca. El código alemán vigente no tiene una disposición de esta naturaleza, y lo que yo he dicho es que la contenía el proyecto alemán de 1958, que no llegó a ser ley.

Por estas razones, por ser una innovación en el país y movidos principalmente por el propósito de desterrar de la República el odio racial, es que la comisión aconseja la redacción de este inciso en la forma en que lo he enunciado al principio de esta breve exposición.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Patlis.

Sr. Patlis. — Previamente solicito que por Secretaría se lea el nuevo texto que he propuesto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del nuevo inciso propuesto por el señor diputado.

Sr. Secretario (Oliver). — Dice así: «El que públicamente instigare a realizar o ejecutare actos contra personas o instituciones que signifiquen discriminación con fines de enfrentamiento de individuos o grupos por motivos de índole racial o religiosa. Si el delito se cometiere por organización o respondiere a concierto entre varias personas, la responsabilidad penal recaerá sobre cada uno de los dirigentes o coautores y tal circunstancia deberá reputarse como agravante a efectos de la graduación de la pena. Si el delito fuere cometido por funcionario público llevará como accesoria la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Patlis.

Sr. Patlis. — Quiero aclarar que este inciso, redactado en colaboración con el señor diputado Schaposnik, es el fruto de la coincidencia obtenida en la noche de ayer. Recordará la Cámara que el capítulo de agravantes —salvo el rechazo de la comisión en cuanto al carácter de absoluta y perpetua de la inhabilitación— fue leído por Secretaría y había sido aceptado por la comisión, y que la redacción del primer párrafo, donde se incrimina la discriminación con fines de enfrentamiento de individuos o grupos por motivos de índole racial o religiosa, fue el resultado del acuerdo obtenido en el cuarto intermedio, al que hice referencia cuando apoyé la moción del señor diputado Jofré de pasar a otro cuarto intermedio hasta hoy para aunar criterios sobre el resto del proyecto.

Lamento que ese receso de la Cámara haya perjudicado la sanción del artículo que ayer podía haber sido votado. Lamento que, con una timidez que no comprendo, nos ajustemos tanto a la legislación comparada. Como legisladores tenemos la obligación de captar una realidad en nuestra Nación y de buscarle la solución idónea; no podemos ser furgón de cola de la legislación extranjera; algún día tenemos que ser locomotora en la legislación comparada.

Lo que debemos punir es, inclusive, la instigación al odio. Somos la resultante de una fusión de razas, expresión a la que evidentemente no le podemos encontrar autor y que centenares de publicaciones, inclusive los libros de texto, repiten habitualmente. No podemos admitir que, contra ese trabajo de acrisolar una nacionalidad, grupos minúsculos auspicien el enfrentamiento por motivos raciales o religiosos. Esa es la figura que debemos tipificar y ése es el delito que debemos punir.

El dictamen que la comisión acaba de ofrecer a la consideración de la Cámara es mucho menos que el proyecto del Poder Ejecutivo y es mucho menos también que el dictamen de mayoría que fue puesto a consideración en particular en la sesión de ayer. De modo que hemos perdido muchas horas en el intento de lograr una precisión mayor en la tipificación de este delito y sólo hemos ganado darle una re-

dacción mucho más vaga e imprecisa a este artículo. Todo el tiempo que hemos empleado desde aproximadamente las 18 de ayer hasta las 17 de hoy ha sido absolutamente inútil. En lugar de adelantar, hemos ido hacia atrás.

Quiero incitar a la Cámara a encarar este problema en la medida de la gravedad que tiene en nuestro país, que ha sido denunciada internacionalmente y que preocupa al Poder Ejecutivo hasta el límite de inducirlo a proponer una de las pocas modificaciones al Código Penal que ha incluido en su mensaje.

Debemos reprimir de una vez por todas, con precisión y valentía, sin subordinarnos a la legislación extranjera, sino analizando la realidad que vivimos día a día en nuestro país, a estos sectores que están provocando la disociación de nuestra comunidad. No los admitimos, y por tal, y siendo fieles a la declaración que por boca del presidente de la Cámara en una oportunidad efectuaron todos los bloques, debemos desterrarlos, tipificando con claridad y valentía una figura legal que los puna definitivamente. En nuestro país no tienen cabida los que hacen propaganda del odio por cuestiones raciales o religiosas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez. — Nuestro sector va a apoyar el dictamen de la comisión tal como ha sido enunciado por el miembro informante. Entendemos que debemos ser prudentes al legislar este tipo de figuras que se quiere incriminar, máxime si se tiene presente que en toda la legislación extranjera no hay ningún Código Penal vigente en este momento que llegue a una incriminación de la naturaleza que hoy nosotros prohijamos. Es decir, creo que en este momento estamos marcando en el orden internacional uno de los puntos de avanzada más importantes en esta materia.

Por estos motivos, nuestro bloque va a apoyar el dictamen de comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Nuestro bloque va a votar también el texto propuesto por la comisión, y va a insistir en un agregado, que ya ha sido fundado por esta bancada en el día de ayer.

La redacción que, con el apoyo de la comisión, presumo será definitiva, es la siguiente: «El que instigare o ejecutare públicamente actos que provoquen la lucha o segregación de sectores sociales, fundados en motivos religiosos o raciales.» Estamos totalmente de acuerdo con esta redacción, pero proponemos que se agreguen las palabras «o políticos».

No cabe ninguna duda de que, así como lo ha expuesto con claridad y lucidez el señor diputado Patlis en cuanto a la materia religiosa o racial, existen también minorías, generalmente ínfimas, que se organizan y tienen los medios

más sutiles para provocar la segregación de tipo político en el país.

Queremos que esta incriminación que se hace en el caso de las discriminaciones religiosas o raciales alcance también al campo de lo político, como forma real, factible, cierta, valiente y definitiva de desterrar la discriminación política directa o indirecta, simulada o no.

Dejo así brevemente fundado nuestro apoyo al texto propuesto por la comisión y el agregado que concretamente he mencionado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — El bloque de la democracia cristiana va a votar en contra del artículo nuevo que se propone. Pero tratándose de una materia tan delicada, necesito aventar las suposiciones malevolentes que, en torno de nuestra posición pudieran hacerse, reiterando muy brevemente el pensamiento que nos inspira en esta materia.

La democracia cristiana se funda en una filosofía personalista y comunitaria. Personalista, en cuanto exalta la dignidad de la persona humana como sujeto, fundamento y fin de la vida social y comunitaria en cuanto cree que el hombre es un ser con vocación social, de amor, fraternidad, justicia e igualdad.

Por estas razones, la democracia cristiana florece en el continente negro, en el continente blanco y en el continente amarillo, pues cree y practica los valores que resumen y definen la dignidad de la persona humana, sin hacer distinción de razas, de colores ni de credos, convencidos como estamos de la unidad del género humano y del respeto que merece el valor de la persona.

Necesitaba decir estas cosas para reiterar una vez más nuestra filosofía democrática y, en este caso especial, nuestro repudio permanente, inalterable y total a las bandas fascistas o comunistas que hacen de la violencia un estilo de vida, y nuestro concurso más pleno a todo lo que signifique la posibilidad de erradicar a esta lacra social en el país.

También pensamos, como lo dije ayer, que tratándose de la legislación de fondo, las normas que afectan a la libertad y a la seguridad personal requieren un sereno y meditado estudio. No podemos sentar el mal precedente de abrir válvulas de escape en esa legislación incorporando normas surgidas de un rápido intercambio de ideas y de transacciones más o menos generosas, pero que, de ninguna manera están asentadas en el estudio sereno, meditado y profundo que debe servir como un tamiz para incorporar normas objetivas.

Tengo sobre mi banca el texto de los artículos 209 y 210 del Código Penal que sancionan la instigación a cometer delito y la asociación ilícita; a mi juicio, son instrumentos idóneos y aptos para que los poderes públicos repriman —como ya lo deberían haber hecho— a las bandas de delinquentes que operan en el país.

La sociedad no está, pues, desgarnecida para reprimir estos delitos, desmanes o excesos.

Con las salvedades hechas en torno a la filosofía y a la pasión que nos inspiran estos problemas, señalo también nuestras reservas en todo lo que se refiere al meditado análisis y profundo estudio que requiere una legislación de fondo, que hacen que nuestro bloque vote en contra del artículo propuesto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — Brevemente voy a expresar las razones que determinan a nuestro bloque a prestar adhesión al texto que acaba de leer el señor miembro informante de la mayoría.

Desde luego que no se puede decir con razón, como se ha manifestado en el seno de esta Cámara, que hemos venido a improvisar sobre materia tan delicada. Yo puedo asegurar que desde hace varios meses a esta parte, y con el asesoramiento debido, he encontrado una gran preocupación en todos los miembros que constituyen la Comisión de Legislación Penal. Y, por consiguiente, el texto que venimos a proponer en el recinto no es el resultado de una improvisación ni tampoco una redacción realizada más o menos apresuradamente en los pasillos del Congreso.

Es que estamos tratando una materia muy delicada, que, en alguna medida, subrayé en la sesión de ayer, porque estamos viviendo en un régimen que pretende ser de democracia y de libertad, en el que se autorizan todas las opiniones y en el que la confrontación de opiniones, así sea en materia religiosa o racial, debe merecer en todos los casos igual respeto. De manera que, a poco que enunciemos este principio, podremos tener una idea cabal de la delicadeza de la materia que estamos tratando, a fin de estructurar una norma e incorporarla al Código Penal. No es cuestión de rebasar la medida, porque si la rebasamos podemos desatar una lucha social de tipo religioso o racial, que es, precisamente, lo que queremos evitar. Estamos tratando de estructurar una norma que debe tener por finalidad clara la preservación del orden público. Por consiguiente, no podemos incriminar todo tipo de discriminación racial o religiosa. Esa discriminación, que no pasa del intercambio de opiniones, que a veces es agrio y apasionado, no es lo que se incrimina; lo que se incrimina es el que, por esa vía, provoque la lucha o segregación de sectores sociales, fundada en motivos religiosos o raciales. Aquí estamos claramente ante una figura delictuosa, y la norma tiende a corregir un mal que ya resulta demasiado evidente en el país para que lo pongamos en duda.

La estructuración de esta norma nos ha provocado muchas preocupaciones y desvelos. Confesamos que hemos tenido que cambiar muchas veces la redacción, pero creemos sinceramente que ésta es la fórmula que se acomoda a lo que queremos estructurar. Tenemos el res-

paldo, en alguna medida, de un penalista como el doctor Núñez, cuya opinión es tan autorizada como la de los penalistas que quisieron resolver este problema como circunstancia agravante de otros delitos ya tipificados por el Código Penal, tal como ocurre, por ejemplo, con el proyecto Soler. Pero nosotros entendemos que establecer circunstancias agravantes al homicidio, a la lesión grave o al daño, cuando estos delitos son inspirados por dichos motivos religiosos o raciales, no importa resolver el problema. Aquí hay que crear una nueva norma penal, pero una norma que preserve el orden público y nada más. Y no pasemos de allí, porque de lo contrario vamos a hacer daño en vez de hacer bien al país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — Diré muy pocas palabras para fijar la posición de nuestro bloque, que, por cierto, guarda estrecha armonía con la sustentada por el señor diputado Sago.

Consideramos que en estos instantes la Cámara puede cometer un doble grave error en materia de legislación. Por un lado, decimos que estamos derogando leyes represivas, y por otro, trasplantamos algunas leyes represivas al código de fondo y creamos nuevas figuras delictivas.

No necesito abundar en mayores consideraciones para señalar que nuestro partido está abiertamente en contra de todo lo que importe lucha de tipo racial. Me atrevería a decir que todos los señores diputados tienen que tener una posición muy similar a la que elocuentemente pusiera de manifiesto el señor diputado Vedia. Esto no está en discusión. Y si señalo en pocas palabras la posición de nuestro bloque al respecto, es al solo efecto de evitar cualquier suspicacia en esta materia.

Este es un tema seductor; lógicamente, atrae a todos los hombres bien nacidos que han militado y que siguen militando dentro de la democracia y que tienen un alto concepto de la valoración humana. Pero no nos dejemos arrastrar ni por éste, ni por ningún tema, por superior que sea, en todo cuanto se refiere a modificaciones de los códigos de fondo. En este caso creo que vamos a incursionar en la legislación de fondo ocasionándole un grave deterioro. Creo que en vez de mejorar el problema lo estamos agravando, y que de la misma manera que en este caso se trataría de incorporar una figura delictiva, que desgraciadamente tiene su justificativo por algunos desmanes que han ocurrido en el país, cualquier otro señor diputado tendrá suficiente derecho para solicitar también que se incorpore algún artículo al Código Penal, modificando o creando figuras delictivas.

La seriedad en materia de legislación hace que nuestro bloque mantenga firme su posición. Hemos votado la derogación lisa y llana de la legislación represiva; pero no hemos de admitir

en silencio, ni, mucho menos, acompañar con nuestro voto las iniciativas que en esta materia han traído la posibilidad de que el Código Penal sufra alteraciones que considero substanciales y que rompen la armonía de la legislación de fondo, que es lo que en definitiva tenemos que preservar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Luco?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión no acepta, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 3º por partes. En primer lugar, se votará el encabezamiento.

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se votará ahora el segundo párrafo del artículo 3º, que dice así: «Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.»

— Resulta afirmativa de 72 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso 1, con la redacción propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Luco al inciso 1, que acaba de votarse.

— Resulta negativa de 78 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el inciso 3 del despacho de comisión, que pasa a ser inciso 2.

Tiene la palabra el señor diputado Avila.

Sr. Avila. — Hago indicación de que se suprima el inciso 2 del artículo 213 bis, inciso que en el proyecto figura bajo el número 3.

Dije ya en la discusión en general que aprobar este inciso, que establece la incriminación de quienes «pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar o los deberes inherentes a su estado», significa inferir una ofensa gratuita a las fuerzas armadas de nuestro país. Considero y respeto el elevado criterio de los jefes de nuestras fuerzas armadas para no dejarse impresionar o presionar por cualquier apresurado, a los efectos de desobedecer las leyes o de llevar a cabo un golpe que pueda trastocar el orden social y jurídico del país.

Pensando en voz alta, yo me pregunto si esa instigación pública o privada fuera a los efectos de realizar un golpe de Estado y la revo-

lución resultante tuviera éxito, estos señores, que automáticamente se convertirían en las primeras figuras civiles del país, ¿qué serían en realidad? ¿Serían héroes por haber trastocado el orden social del país? ¿O serían reos a quienes tendría que aplicarse la pena de prisión de seis meses a tres años?

Por estas razones, y por lo expuesto en la discusión en general, hago indicación de que se suprima el inciso 3 del despacho, inciso que debido a la supresión del inciso 1 ha pasado a llevar el número 2.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la supresión propuesta por el señor diputado Avila?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Roberto.

Sr. Roberto. — Con un fundamento diverso del que acaba de exponer el señor diputado que ha hecho uso de la palabra hace unos instantes, propongo también la supresión de este inciso 3 del artículo 213 bis. La razón que me mueve a ello es que el tipo de conducta que incrimina se halla previsto en el artículo 234 vigente del Código Penal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez. — Voy a oponerme a este inciso 3, que pasa a ser inciso 2. En primer lugar, estimo que la tipicidad penal tampoco está bien lograda en este caso. Para llegar a una incriminación de esta naturaleza no creo que la instigación pueda ser privada; es bastante con que sea pública.

Por otro lado, menciono el sentido lato de la disposición que se propone. Yo no alcanzo a comprender cuáles son los deberes de la disciplina militar que deben ser instigados a desobedecer. Dentro de los deberes de la disciplina militar hay muchísimos. La instigación a desobedecer muchos de esos deberes de la disciplina militar no guarda una entidad de tal calidad y gravedad como para que la alcance una sanción de la índole que se propone.

Por otra parte, la inclusión en el artículo de los componentes de las fuerzas de seguridad vuelve a sembrar la confusión. Es decir, entonces, que este artículo no responde a una realidad. El legislador debe recoger de la realidad los hechos que merezcan una incriminación cuando exista una razón de reiteración notoria de los mismos.

Estimo que los hechos que puedan haberse suscitado son evidentemente aislados, es decir, que no son lo suficientemente reiterados como para que el legislador los recoja y trate de incriminarlos.

Creo que la razón de ser de este artículo que se propone es prácticamente inútil e innecesaria.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Señor presidente: dentro del contexto del despacho y en especial del artículo 213 bis, mi colega ha estimado conveniente proponer la supresión del inciso 2. Por mi parte, quiero aprovechar la oportunidad para proponer la sustitución del inciso 2, cuya supresión se ha sugerido, por un inciso nuevo que estimo de cierta importancia y que aspira a tutelar como bien jurídico el sistema representativo y republicano de gobierno. Admitido este sistema como valioso, vale decir, el sistema democrático de vida, la sociedad que así valora estos fines debe reprobar las conductas que persiguen precisamente su destrucción.

Durante la discusión en general del proyecto di argumentos y anuncié que en su hora iba a proponer algunas modificaciones. Y éste es el momento. Hay necesidad de impedir —y creo que en esto hay coincidencia plena entre todos los sectores que componen la Cámara— el establecimiento de sistemas dictatoriales, tiránicos o totalitarios. Podrán haber habido discrepancias en cuanto a la calificación de algunos sistemas concretos, pero ha habido plena coincidencia en que los sistemas dictatoriales, tiránicos o totalitarios no se compadecen con los sistemas democráticos de vida.

Desde este punto de vista propongo concretamente como inciso 2, sustitutivo de aquél cuya derogación se pide, o como inciso nuevo, que iría a continuación del encabezamiento del artículo 213 bis, el siguiente: «Los que constituyan o integren asociaciones que tengan por fin implantar o reimplantar sistemas dictatoriales, tiránicos o totalitarios, o que atenten contra el sistema representativo o republicano de gobierno. Igual pena recibirán cuando las asociaciones o sus integrantes posean, fabriquen o distribuyan armamentos de cualquier clase para el cumplimiento de esos fines. Se aplicará accesoria de inhabilitación política o gremial y para ejercer funciones públicas por el término de cinco años.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — Señor presidente: en virtud de las razones expuestas en la sesión de ayer por el señor diputado Sago, nuestro bloque votará en contra de la inclusión de esta norma en el Código Penal, así como también de todas las inclusiones que forman parte del despacho que estamos considerando. Pero estimamos importante decir algo sobre la idea fundamental contenida en el inciso cuya inclusión se propone, la que ha sido considerada por algún orador como innecesaria, inoportuna y ajena a la realidad que debe tener en cuenta el legislador para acuñar las normas penales y determinar las conductas que deben ser incriminadas. Y es evidente que lo que con este inciso se persigue es convertir en conducta delictuosa, es incriminar en forma expresa un modo de hacer político muy corriente en los últimos años en nues-

tro país; es convertir en delito el ir a golpear las puertas de los cuarteles para apelar en contra de las resoluciones que adopta el pueblo en los comicios. Y eso no es ajeno a la realidad, no es nada que estemos creando aquí en una labor de gabinete, es algo que hemos vivido a través de todos estos años aunque, tal vez, afortunadamente, no la estemos viviendo en este momento. Y digo tal vez, porque tengo la seguridad de que no haya alguien, en algún lado, que esté golpeando la puerta de algún cuartel.

Afortunadamente, las leyes penales no son de aplicación retroactiva, porque si lo fuera, al sancionarse esta norma habría muchos dirigentes políticos de nuestro país que quedarían privados de la libertad.

Por eso nosotros acompañamos calurosamente la idea, aunque, no estemos dispuesto a votarla en este momento, por las razones de fondo que explicó el señor diputado Sago y que reiteraré en la sesión de hoy el señor diputado Domingorena.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — La intención de incorporar este inciso pone de manifiesto, una vez más, lo que, a mi juicio, importa ligereza de consideración en lo que se refiere a estos temas para incorporarlos a una materia tan delicada como es la legislación de fondo.

El artículo 233 del Código Penal reprime al que tomare parte como promotor o director en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición. El vocablo «promotor» deriva de promover, es decir, de mover a algo o a alguien en pro de algo. De modo tal que la figura que pretende incorporarse como inciso nuevo al Código Penal está contemplada, pero de manera mucho más objetiva, cual debe ser la tipificación de una norma penal, en el artículo que acabo de leer, y además reiterada y precisada en el artículo 234, que creo fue el que invocó el señor diputado Roberto para fundamentar también su oposición a este inciso.

Sr. Bobillo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Vedia. — Con todo gusto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Deseo preguntarle al señor diputado si siempre que se violan los deberes de la disciplina militar u otros inherentes al estado militar se cometen los delitos de sedición o rebelión.

Sr. Gutiérrez. — ¿Me permite otra interrupción, señor diputado?

Sr. Vedia. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez. — Quisiera que la Honorable Cámara advirtiera que lo que se trata de incriminar es la violación a los deberes de la disciplina militar; no se trata de los deberes militares. Si yo privadamente le digo a un soldado que no haga la venia, caigo en esta tremenda pena y el hecho me parece que no tiene una calidad tal como para ser reprimido de tal manera.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Contesto a la observación del señor diputado Bobillo.

Es evidente que no toda instigación o estímulo puede desembocar en una rebelión militar; pero lo que aquí interesa, con un criterio de defensa social e institucional, es prevenir hechos o actos que desemboquen en un alzamiento armado, en una revolución o en un movimiento contra los poderes constituidos, es decir, contra la organización institucional del Estado; porque en lo que hace a normas de disciplina militar no es el Código Penal el adecuado para contenerlas, ya que están el código y los reglamentos militares, o sea, otro tipo de normas, para prever esas materias.

Creo que si tal ha sido el criterio, es peor todavía, porque esto significa una desarticulación, a mi juicio tremenda, del ordenamiento legal. Insisto, entonces, en que si lo que se quiere reprimir es el peligro de que por vía de estímulo los militares se alcen contra las instituciones del país, esa posibilidad está perfectamente prevista en los artículos del Código Penal que acabo de leer. Ellos hacen sobreabundante el inciso que se quiere incorporar a esta ley. Vuelvo a señalar que la insistencia de quienes lo postulan revela una falta de estudio meditado y de serena lectura de disposiciones ya contenidas en la legislación vigente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

Sr. Fernández (R.). — Este bloque va a apoyar el despacho de la comisión porque, entre otras razones, la figura a que se han referido los oradores precedentes —con todo el respeto que me merecen— es distinta a la que está contemplada en el dictamen. En efecto, no se trata aquí del delito previsto en los artículos 233 y 234 del Código Penal, sino —como dice el inciso— aquel cometido por «los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar». Evidentemente, se trata de otra figura.

El señor diputado Vedia ha insistido; por otra parte, en que el proyecto que estamos tratando es el resultado de una improvisación y en que no ha sido estudiado suficientemente. Como ya lo señaló muy bien el señor diputado Bilbao, este proyecto se ha analizado a fondo. La comisión ha demostrado una preocupación seria

por este asunto, en el que ha trabajado con gran responsabilidad y demostrado evidente idoneidad.

Entre los antecedentes que ha tenido a estudio la comisión está, por supuesto, el mensaje del Poder Ejecutivo, en el que se aclara con precisión el alcance del inciso que estamos discutiendo. Me voy a permitir leer, con el permiso de la Cámara, el párrafo pertinente, a los fines del mejor esclarecimiento de esta cuestión: «el inciso tercero lleva al área del derecho penal el castigo de los que, pública o privadamente, instigaren a los miembros de los cuerpos armados a desobedecer las leyes o los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado. Las fuerzas militares y de seguridad son sagradas en sí mismas cuando se mueven dentro de sus fines propios; por eso, la actividad de los que se ponen en contacto con ellas para sacralas de sus reales y legítimos objetivos y levantarlas contra las leyes o los deberes dentro de cuyo marco se mueve su acción legítima, debe ser castigada porque perturba en alto grado la paz social».

La disposición que discutimos es, por supuesto, aplicable a los civiles exclusivamente. Como todos sabemos, los militares tienen un código propio para castigar los delitos que caen dentro de su fuero. De modo que, en conclusión, el presente es un inciso que ha sido perfectamente estudiado y debe ser aprobado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Señor presidente: nuestro bloque, por las razones de orden técnico y de oportunidad que señalara el diputado que habla en ocasión de producir su informe en minoría, va a votar en contra del inciso que estamos tratando.

Además de esos motivos, nos mueve uno de orden práctico. Creemos que esta disposición es absolutamente inocua en virtud de las consideraciones formuladas por el señor diputado Avila.

La experiencia sobre estas cosas es dolorosa para el país, como tal vez lo sea la experiencia universal en esta materia. Quienes instigan o promueven un levantamiento militar, si tienen éxito pasan a ser los héroes de turno, pero si fracasan merecen execración de la historia y de los vencedores.

Por otro lado, no encuentro correlación entre el acto y la pena que se propugna, de uno a seis años, para quien simplemente instigare a la violación de los deberes inherentes a la disciplina, cuando nosotros hemos visto que quienes sublevaron la escuadra de mar o bombardearon en forma despiadada algún acantonamiento militar cumplieron treinta días de arresto en sus casas, con todas las comodidades necesarias.

Me temo mucho que estas disposiciones puedan preservar la disciplina y el cumplimiento de los deberes específicos militares. Estimo que por

su inocuidad no deben figurar en el Código Penal, que innecesariamente se modificaría con normas de muy difícil aplicación.

Sr. Bobillo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Caro. — Sí, señor diputado.

Sr. Bobillo. — Deseo señalar al señor diputado que el delito que pena el inciso segundo del artículo que estamos considerando no es el mismo a que se refieren los artículos 233 y 234. Estos reprimen el delito de sedición o rebelión: la rebelión es el movimiento armado contra el gobierno federal, y la sedición, el movimiento armado contra el gobierno provincial.

En el inciso que consideramos se trata, en cambio, del delito que implica la violación a las leyes y a los reglamentos militares, como puede ser el instigar a las fuerzas armadas o a un jefe de las fuerzas armadas para que desobedezca las órdenes de un superior, o se rebeldar internamente contra éstas. Vale decir que son situaciones distintas de las que contempla el delito de sedición o rebelión.

Sr. Caro. — El señor diputado me atribuye una ingenuidad jurídica que no creo poseer. Por supuesto, he advertido esa diferencia, que es palmaria. Pero aquí hay una cuestión de inocuidad, porque estas disposiciones legales no van a funcionar, en ningún caso, por la dificultad de las pruebas y por la propia naturaleza de la cuestión.

Nuestro bloque se ubica en una posición absolutamente realista, y va a votar en contra de la disposición. No obstante, nos parece muy bien que el partido que gobierna ahora esté cuidando las puertas de los cuarteles para que nadie vaya a golpearlas a horas intempestivas, pero deben comprender que todo esto es absolutamente innocuo para poder pretender preservar la estabilidad institucional.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Señor presidente: dado que los bloques han emitido su opinión sobre el asunto que está en discusión, voy a formular la correspondiente al grupo demócrata progresista.

Vamos a votar en contra del artículo proyectado por la comisión por algunas de las razones que se han dado en el recinto, entre otras, porque si estas disposiciones están exclusivamente destinadas a proteger la disciplina interna de las fuerzas armadas de lo que puede ser una tentativa de seducción que formulen hombres civiles, es evidente que la norma no alcanzaría la eficacia que se persigue.

Cuando una situación de esta naturaleza se produce se llega incluso a arrasar con la Constitución Nacional. No habrá de ser, se nos ocurre, tan sólo una norma del Código Penal la que detenga la tentativa o el delito frustrado. Y he dicho delito frustrado porque no habla de la efectividad de la intentona de captar la volun-

tad de los militares o de los componentes de las fuerzas armadas para desobedecer las leyes, sino que simplemente se refiere a la intentona, a la tentativa, al afán de hacerlo. Esto se denomina delito frustrado, aunque con matices penales.

Sr. Fernández (R.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Muniagurria. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Fernández.

Sr. Fernández (R.). — En primer lugar, discrepo respetuosamente con el señor diputado, porque entiendo que no es delito frustrado.

Por otra parte, hago notar que el precepto que se proyecta se refiere no sólo a las fuerzas militares, sino también a las fuerzas de seguridad, es decir, a la policía de seguridad.

Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — El artículo dice «a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad», lo cual quiere decir que los militares estarían comprendidos; y, yo entiendo que militares no son sólo los que tienen militancia dentro de las filas del ejército, y que la disposición hace referencia a las fuerzas armadas o a cada una de sus ramas.

Sr. Fernández (R.). — Y a las fuerzas civiles también.

Sr. Muniagurria. — Y a las fuerzas civiles de seguridad.

Correspondería, pues, establecer una sanción para el delito frustrado, porque si fuera para el delito que se consuma, es decir, que alcanza la captación de las fuerzas militares o de las fuerzas de seguridad, sobrevendría el éxito desde el punto de vista material o la movilización de las fuerzas; y en esas condiciones, las normas del Código Penal, conforme a la experiencia histórica que tenemos, no habrían de ser debidamente aplicadas.

Yo aspiro, ya no a que sea delito frustrado, sino que sea éste un delito imposible, que técnicamente también tiene una configuración en el derecho penal; delito imposible porque el canto de sirena de los civiles no llegue a los cuarteles para cambiar la actitud de disciplina y de servidores del orden establecido por la Constitución, que deben respetar y hacer respetar las fuerzas de seguridad de la Nación.

Por encima de ello, tenemos también una razón principista sobre la que voy a coincidir con las expresiones de los señores diputados de otros bloques. El Código Penal es un todo orgánico, es una estructura legal armoniosa, es un sistema normativo integral; y no es de buena técnica legislativa introducir modificaciones, no diré improvisadas, pero sí más o menos circunstanciales, que atenten contra esa armonía y esa sistematización.

De ahí que, ratificando el criterio sostenido en la comisión respectiva por el miembro representante de nuestro sector demócrata progresista, señor diputado De Cara, nuestro bloque va a votar en contra de la iniciativa propuesta por la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — Señor presidente: voy a tratar, en la exposición más breve posible, de señalar las razones que tiene nuestro bloque para apoyar con su voto el despacho de la mayoría en el inciso 2º del artículo 213 bis.

Los oradores que me han precedido en el uso de la palabra aducen que en el Código Penal existen disposiciones que reprimen este género de actividad delictiva. Sin embargo, no es así. Las disposiciones que se han señalado pertenecen a un capítulo especial del Código Penal que se refiere a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional de la Nación, en especial a las disposiciones comunes aplicables a los llamados delitos de sedición y de rebelión.

Pero por esta norma penal contenida en el despacho de la mayoría se trata de reprimir la instigación, que ya no atenta contra los poderes constituidos, ni contra el orden constitucional, sino contra el orden público. El bien protegido, entonces, es el orden público, que nadie puede dudar se compromete gravemente cuando se va a golpear las puertas de los cuarteles para convencer a gente, que debe estar en su función específica de respaldar el orden constitucional, con la finalidad de que lo altere profundamente, aunque esa alteración pretendida no dé sus frutos. Entonces, no estamos en presencia de una simple tentativa, ni de un delito frustrado, sino de un delito consumado, y nosotros no podemos ser insensibles ante la necesidad de proteger la seguridad de la sociedad contra este género de acontecimientos.

Sr. Muniagurria. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bilbao. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Muniagurria. — Cuando he utilizado la calificación de delito frustrado lo he hecho en la inteligencia de que se debiera calificarlo como tal en el caso de que la tentativa de captar la voluntad de las fuerzas militares o de las fuerzas de seguridad fracasase. En esas condiciones el delito aparecería como frustrado en su propósito o finalidad de tipo político.

Sr. Bilbao. — Hecha la aclaración por el señor diputado Muniagurria, me doy cuenta que ante la inexistencia de esta norma, es posible incurrir en ese caso en una tentativa de sedición o de rebelión.

Sr. Caro. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Bilbao. — ¡Cómo no!

Sr. Caro. — Creo que lo que aquí se legisla es un delito de otra naturaleza y de carácter típicamente formal; vale decir, que no atiende a los resultados, sino a la mera acción del su-

jeto que ejecuta; en este caso, la instigación a violar los deberes inherentes a la disciplina militar.

Sr. Bilbao. — Efectivamente es así. Entonces, estamos frente a una figura delictiva nueva, pero nadie puede negar, en nuestro ambiente y con la experiencia de los últimos y de los remotos años, que es necesario crearla en nuestro país.

Sr. Gutiérrez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bilbao. — Sí, señor diputado.

Sr. Gutiérrez. — Quiero señalar la contradicción que está ínsita en este artículo. Se menciona a los componentes de las fuerzas de seguridad, y lo que se quiere castigar es la instigación a violar los deberes de la disciplina militar. El señor diputado Fernández ha señalado que dentro de las fuerzas de seguridad está incluida la Policía Federal, y yo me pregunto qué deberes de disciplina militar puede violar la policía.

Sr. Bilbao. — Es evidente lo que se quiere incriminar con esta norma penal. Se quiere incriminar la acción tendiente a conmover las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad para lanzarlas a alterar el orden público, sin necesidad de que se consuma el delito de sedición o el de rebelión, que están definidos en otras disposiciones del Código Penal.

Pero quiero, antes de terminar, porque me parece suficiente la fundamentación que acabo de dar, manifestar que la afirmación que hago de ninguna manera me lleva a condenar algún hecho del pasado en que las fuerzas militares y de seguridad han tenido que levantarse contra el orden constituido.

Sr. Domingorena. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bilbao. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — Francamente, si existía alguna duda sobre que este artículo no puede ser injertado en el Código Penal, las últimas palabras del señor diputado la han disipado, pues ponen de manifiesto que ya antes de sancionar el artículo, estamos diciendo cuándo nos gusta y cuándo no nos gusta el golpe revolucionario.

El señor diputado termina de decir que esto no importa, de ninguna manera, formular cargos sobre hechos que han ocurrido en el país, durante los cuales las fuerzas armadas, en defensa de las instituciones, de la democracia y de la libertad —seguramente iría a decir—, estaban plenamente facultados para efectuar este avance sobre el orden constitucional.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Domingorena. — Estoy recogiendo las palabras del señor diputado. De todas maneras, creo que el señor diputado es un excelente abogado defensor, de modo que los procuradores de menor cuantía me parece que pueden descansar un rato.

De tal manera, ya estamos diciendo qué buscamos y cómo calificamos el delito. Ya estamos constituidos en tribunal de alzada para decidir si la revolución conviene o no. Si nos gusta, por supuesto estará suficientemente adornada como para sostener que ha sido en defensa del orden constitucional, aun cuando avasalle las instituciones. Si no nos gusta, entonces aplicaremos el artículo que en este momento estamos fabricando —porque eso estamos haciendo—, y la persona que se acerque al cuartel, o que ni siquiera se haya acercado —a esto también quiero ir— podrá ser incriminada, porque la prueba en contrario va a resultar muy difícil de acreditar, si no estamos alertados de que pueda darse alguna connivencia entre sectores de las fuerzas de seguridad y partidos políticos en turno, para señalar a algún político que pudo o no ser sospechado de instigar a esas fuerzas armadas.

Esto es lo que quería poner de manifiesto. Las palabras del señor diputado me han ahorrado, por cierto, un mayor desarrollo, porque ha explicado perfectamente bien el sentido de este artículo.

Insisto en que esto es una tremenda herejía. Vamos a ocasionar un enorme daño, inclusive a las fuerzas armadas, que es a las que aparentemente se pretende preservar. Además, vamos a poner en evidencia o a exponer a algún político o a algún sector político que, según sea la intención del partido gobernante o del sector denunciante en juego, podrá ser acusado como que ha ido a instigar para la rebelión. Como la prueba en contrario va a ser muy difícil de acreditar, la República quedará convertida en un semillero de delaciones, con el consiguiente deterioro para las fuerzas armadas y también para las fuerzas políticas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — Lamento, señor presidente, que la cortesía de mi parte de conceder una interrupción al señor diputado le haya permitido hacer un discurso que hubiera podido ahorrarlo, si me hubiera escuchado hasta el final.

Sr. Domingorena. — Lo que dijo era suficiente.

Sr. Bilbao. — Yo decía, y vuelvo a manifestarlo, que esto no importa condenar algunos alzamientos que se han producido en el país contra el orden constituido, porque ello importaría la negación del derecho de resistencia a la opresión, que es un derecho que, si bien no está incluido explícitamente en la Constitución, surge del espíritu de todas sus normas, que

tienden a proteger nuestro régimen de libertad y de democracia.

Esto es lo que quería decir, de manera que no se trata de una posición de conveniencia, como el señor diputado Domingorena ha querido calificarla.

He querido significar que todo tiene su límite y que, cuando se trata de estos delitos que se llaman delitos políticos, de alguna manera encuentra justificación su no sanción, cuando el pueblo sojuzgado tiene que rebelarse contra un orden constituido que le niega todos sus derechos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Considero sumamente peligrosa la nueva figura delictiva que se quiere injertar en el Código Penal por la vía tangencial del proyecto en debate.

La instigación y el delito de sedición ya están legislados en el Código Penal, y aunque es cierto que el interés jurídico protegido es el orden público, como aquí se ha señalado, hay una diferencia fundamental entre las normas del Código Penal y este inciso, y allí está la lealtad del Código. Dice el artículo 209: «El que públicamente instigare a cometer un delito...» Es decir que la figura delictiva se caracteriza fundamentalmente por la instigación pública, y si relacionamos este artículo con el 233 y el 234, queda perfectamente establecida la misma figura jurídica que por vía de la instigación a cometer un delito determinado se quiere incorporar ahora al código.

Lo grave de la redacción propuesta está en la expresión «...o privadamente...», lo que revela que aquí se está premiando la delación. Se rompe la tradición jurídica de nuestro Código Penal al crear una modalidad nueva, lo que a mí no me extraña porque ya en alguna sesión anterior, al referirme a la SIDE, hablé de este modo de actuar. Ahora el inciso que se proyecta para modificar el Código Penal me da la razón y está corroborando lo que hemos denunciado en más de una oportunidad desde esta bancada.

No quiero hacer de este tema más debate, pero deseo señalar que la nueva figura delictiva que contiene el despacho modifica la tradición de lealtad de nuestro Código Penal, y que esa expresión «o privadamente» hará en definitiva que se impute el delito a figuras políticas determinadas, cuando así convenga al gobierno y sin más prueba que el «testimonio» —entre comillas— de una par de infidentes. Razones por las cuales vamos a votar negativamente el despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

Sr. Reñé. — He escuchado con mucha atención a los señores diputados en las consideraciones que hacen al inciso que se propone. En general, la línea de argumentación principal se ha referido a la inocuidad de la figura, identificándola

con caracterizaciones ya establecidas en el Código Penal.

Pero a mí me preocupa otro aspecto: el de la latitud de la figura que pretendemos instaurar. Esto no es un delito bien configurado; esto no está bien perfilado; el algo anormalmente vago, en lo que puede caer incriminado prácticamente cualquier ciudadano que tenga relación con algún miembro de las fuerzas armadas. Porque aparte del problema de la prueba, que señalaba bien el señor diputado Domingorena, y que es un aspecto fundamental, porque, evidentemente, se puede poner en situación de reo y de condenado a cualquiera, con tal que se tenga dos o tres personas dispuestas a hacer un testimonio determinado, está el problema de la amplitud con que se pretende aplicar y el sentido que puede tener el concepto de disciplina militar.

Confieso que no conozco los reglamentos militares, como no los conoce la mayoría de los ciudadanos del país. Y pregunto entonces: ¿qué entidad tiene que tener la violación a la disciplina que se pretende sugerir a un militar o a un agente de policía, para que sea punible? Se dice: no es la sedición; no es la rebelión; no es el alzamiento contra el gobierno. Entonces, vamos bajando en el orden de la disciplina y podemos llegar sencillamente al ridículo. Yo me digo: supongamos que alguien aconseja a un soldado presentarse a desfilarse con zapatillas, en vez de hacerlo con el calzado reglamentario. ¿Está incitándolo a violar la disciplina militar? ¿Está comprendido en este artículo?

Entonces, si llegamos a la conclusión de que no sabemos quién va a ser incriminado, este artículo no puede prosperar, porque es una amenaza vaga que puede sencillamente condenar cualquier acto que pueda violar más o menos imprecisa y ligeramente cualquier disposición de la disciplina militar.

Con lo expresado deseo llamar un poco a la reflexión, en el sentido de que este artículo es más peligroso de lo que parece y de lo que se ha puesto de manifiesto hasta ahora. Esta figura puede comprender a mucha gente y por muchos motivos, y puede ser usada para muchas finalidades. Por ello reitero la posición del presidente de nuestro bloque; vamos a votar en contra de este inciso.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión el artículo sustituido propuesto por el señor diputado Sandler?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión no va aceptar las modificaciones sugeridas por los señores diputados, pero se ve en la necesidad de formular algunas aclaraciones. Lo va a hacer con el mayor decoro posible y procurando eludir toda clase de agravios que, por cierto, de alguna manera se han vertido en este breve debate en torno del inciso que vamos a votar.

Los artículos 233 y 234 del Código Penal no contemplan el delito que se trata de incriminar con este inciso. Son otras figuras jurídicas que

se refieren concretamente a la rebelión o a la sedición, que es, como ya lo ha explicado el señor diputado Bobillo, alzarse en armas contra la Nación o contra los poderes constitucionales de una provincia. En este inciso se trata simplemente de incriminar la instigación a ciertos hechos que allí se enumeran y la norma no refleja la preocupación, como lo dice el señor diputado Domingorena, de poner fin a algunas rebeliones que, por cierto, existieron y muchas, y sobre las que no abre juicios quien está hablando en este momento, sino para sancionar ciertos hechos que acontecieron en el país, porque este inciso no está destinado exclusivamente a las fuerzas armadas, sino también, a la policía de seguridad.

Hubo un episodio —todo el mundo lo conoce— en la provincia de Córdoba, en el cual la policía local se negó a cumplir con los deberes inherentes a su cargo y no hubo disposición del Código Penal que permitiera tomar las necesarias disposiciones para evitar el cuadro que vio aquella provincia. Preocupados por eso, para que la policía de seguridad cumpla fundamentalmente con sus fines específicos, es que se establece este inciso. Aquí no hay delitos frustrados, aquí no hay delitos posibles. Aquí se pena la instigación, y en el caso de que constituya un atentado contra el orden público, porque se hace para salvaguardar y mantener el orden constitucional.

La pregunta que formula el señor diputado Reñé sobre el caso de que un soldado vaya a un desfile en zapatillas, no se refiere a una disciplina tan grave que altere el orden público. Si un soldado va a desfilarse en zapatillas hará el ridículo, y sus superiores procederán a arrestarlo y a aplicarle la sanción que corresponda; pero no será sancionado por el Código Penal, porque no pretendemos llegar a tanto.

Lo que nos interesa es el orden público, la tranquilidad y la paz social. Por eso, el caso de quien se peina mal, no quiera desfilarse o no mantenga en condiciones su uniforme militar, no es el contemplado en estas normas ni en el Código Penal.

Es otra la preocupación que tenemos; por eso la comisión mantiene su despacho, y no acepta ningún agregado ni modificación al inciso que consideramos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Es para hacer una consideración complementaria de la que formulara anteriormente.

Yo creo que intrínsecamente este inciso contiene un grave error conceptual. Lo que se incrimina es la instigación a desobedecer las leyes y reglamentos militares, y en la mayoría de los casos esas violaciones no constituyen delitos, sino faltas, que son castigadas como tales. Entonces, por aplicación del principio de que a lo accesorio sigue la condición de lo principal,

no podemos calificar como delito la instigación a cometer lo que es sólo una falta. Hay un tratamiento desigual, y desde el punto de vista lógico y jurídico la redacción es totalmente inaceptable.

Por otra parte, la experiencia de los últimos años, especialmente en lo que respecta a nuestro movimiento, nos dice que una redacción como ésta es propicia para la proliferación, en el seno de las fuerzas políticas, de la acción de los agentes provocadores de la SIDE. Nosotros hemos vivido la dura experiencia de revoluciones «vendidas» por los organismos de informaciones del Estado a través del personal militar a su servicio.

Por eso, y reforzando lo que dijimos anteriormente, vamos a mantener nuestra posición en contra de este artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez. — El artículo que consideramos castiga con prisión de seis meses a tres años al que instigare a desobedecer los deberes de la disciplina militar. Pero se da el caso de que en el Código de Justicia Militar algunos tipos de desobediencia de la disciplina militar están sancionados simplemente con treinta días de arresto. Vale decir que nosotros, de acuerdo con este artículo, pedimos para los civiles, y para el caso de la mera instigación, una pena mayor. Esto es evidentemente un contrasentido, y por eso nuestro bloque votará en contra del texto en consideración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Roberto.

Sr. Roberto. — Señor presidente: hace un momento me limité a señalar escuetamente mi criterio favorable a la necesidad de excluir este inciso de la sanción que se propone. Mas para no aparecer pretendiéndolo de una manera arbitraria, deseo ampliar en muy pocas palabras el fundamento de esta tesis.

He sostenido que esta figura está contemplada en el artículo 234 del Código Penal. ¿Qué se incrimina en la nueva disposición que se propone? La desobediencia de las leyes o la violación de los reglamentos de disciplina militar.

Si se examina el artículo 234 del código, apenas se rastree un poco en su filiación, se advertirá que, en efecto, esta figura está allí perfectamente contemplada. La disposición ha sido tomada del antiguo código español y del proyecto argentino de 1891, y encuentra también un antecedente en la legislación chilena.

¿De qué se trata en esa norma penal? De seducir tropas; es la figura de la seducción de tropas; y además la de usurpación de mando. ¿Quién seduce a la tropa? En la interpretación del proyecto de 1891 hecha por exegetas de indudable conocimiento, como en la interpretación del código penal español, se trataba del promovedor. El promovedor de la sedición, el promovedor de la rebelión, el promovedor de la

alteración de la disciplina militar. Vale decir, que todas las formas que procura incriminar la nueva figura están comprendidas en el artículo 234; que además incluye otras, puesto que es mucho más lato, como la de usurpación de mando.

El inciso que se propone constituye un pleonismo, una repetición dentro del Código Penal.

Esta posición puede ser defendida en un debate serio. Yo no he de abundar en mayores argumentaciones; pero sostengo que tanto la instigación como la tentativa para crear un estado de indisciplina dentro de las fuerzas armadas, o la tentativa de sedición, o la tentativa de rebelión, están contempladas en el artículo 234 del código vigente. Por eso, a mi juicio, debe rechazarse el inciso 3 del proyecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia, quien reglamentariamente dispone de cinco minutos, por tratarse de una segunda intervención.

Sr. Vedia. — Efectivamente, señor presidente, es mi segunda intervención, pero no puedo sustraerme a la necesidad de insistir para exhortar al radicalismo del pueblo a que no incorpore esta norma como inciso nuevo del Código Penal.

Tengo para mí el convencimiento de que estamos por cometer un hecho gravísimo, legitimando —como bien se ha dicho— la delación, la más deleznable de las actitudes en el hombre, rompiendo, como se ha señalado con razón, con normas de lealtad y de limpieza entre los argentinos. Todo ello, sin siquiera precisar cuál va a ser el procedimiento para probar la instigación privada, dejando así establecido un instrumento de arbitrariedad inconmensurable que hará posible la aplicación de este artículo a quien quiera fuese, como ha dicho el señor diputado Reñé, que tuviese el día de mañana cualquier relación con militares y efectuara con ellos cualquier cambio de ideas sobre la situación o la evolución política general del país. Yo creo que ésta es un arma gravísima.

Mi preocupación se acrecienta aún más cuando advierto que esta norma viene a incorporarse a la pesada carga que sobrevivirá todavía en el país como legislación represiva.

Al iniciarse este debate, tenía la esperanza de que en una expresión unánime de convivencia democrática, de confianza en la libertad y de aventamiento del miedo a la libertad, borraríamos todas y cada una de las disposiciones represivas, y ayer el bloque de la primera minoría dejó subsistente y en vigor la más grave, peligrosa y monstruosa de las normas represivas al negarse a derogar la ley 13.234 llamada de organización de la Nación para tiempo de guerra, en cuya virtud se desplazan los jueces naturales de la Constitución, se constituyen tribunales especiales, se moviliza a los obreros y se pone en definitiva en manos de la autoridad ejecutiva la más temible y tenebrosa arma de persecución que ha azotado a los argentinos en

los últimos años. A todo esto viene a incorporarse esta nueva figura delictiva.

¿Qué nos está pasando, señor presidente? ¿Seguimos teniendo miedo a la libertad? ¿O queremos estar previniendo futuras rebeliones, legítimas rebeliones, cuando en otros aspectos se pretenda reeditar el cercenamiento de la voluntad popular y la libre expresión de todas las corrientes políticas del país?

Tengo que decir todas estas cosas porque...

Sr. Bobillo. — Es un sueño.

Sr. Vedia. — ... seguro estoy que a poco andar podremos recriminar a la primera minoría los pasos que está dando, llevada por quien sabe qué intereses o presiones.

¿Cómo es posible que en 1958 el ahora vicepresidente de la Nación, doctor Perette, en oportunidad de discutirse estos temas, dijera textualmente: «Queremos derogar la ley 13.234, de organización de la Nación para tiempo de guerra», y este mismo bloque radical del pueblo hoy se niegue a derogarla?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Vedia. — Paradoja de la historia es este caso de los que ayer se batían desde las llamadas tribunas de la libertad contra estas mismas disposiciones proscriptivas, persecutorias y represivas...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Vedia: ha expirado el término reglamentario de que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Vedia. — Termino diciendo, señor presidente, que no solamente no vamos a votar esta disposición sino que, usando de un recurso parlamentario legítimo, nos vamos a retirar del recinto para no prestar nuestro concurso a la aprobación de una norma de persecución y de represión popular.

—Varios señores diputados se retiran del recinto.

—Hablan simultáneamente varios señores diputados, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Antes que nada debo expresar que lamento muy sinceramente que la bancada demócrata cristiana, a la que iba a contestar en este momento, se haya retirado del recinto. Es evidente que la dureza y la adjetivación que ha usado el presidente de ese bloque nos han transportado prácticamente del recinto legislativo, donde deben analizarse con seriedad los problemas sometidos a la consideración de la Cámara, a la tribuna callejera, en la que puede decirse cualquier cosa sin temor a la réplica.

Indudablemente, está en vigencia desde hace muchos años en el país una cantidad de leyes y decretos de naturaleza represiva. Y es indudable también que frente a esa legislación la

Unión Cívica Radical del Pueblo se había comprometido a auspiciar su derogación. Y esa oportunidad no surgió simplemente de la voluntad legislativa, sino que fue el propio Poder Ejecutivo, en el cumplimiento más estricto de las promesas relacionadas con la campaña electoral, el que envió su mensaje con el proyecto de ley derogatorio.

Es cierto que puede haber quedado alguna ley que requiere mayor estudio antes de producir su modificación, pero es igualmente cierto que, como lo tiene dicho esta bancada —no solamente en el recinto—, se va a producir la derogación de la llamada ley de organización de la Nación para tiempo de guerra en la medida en que lo aconseja el estudio que realiza la Comisión de Defensa Nacional. Pero hemos asegurado —y el pueblo todo del país es testigo— que esa legislación no ha sido utilizada desviadamente, ni lo será en el futuro. No obstante, es un instrumento legal omnicompreensivo de un complejo, de un sistema, que debe ser analizado, no solamente a través de una derogación lisa y llana, sino a través de un estudio que produzca las modificaciones necesarias para la tranquilidad popular.

En estos momentos, con alegría de espíritu, nosotros producimos una sanción legislativa que va a terminar con elementos de zozobra, pero no es menos cierto que es obligación primordial del Estado la de vigilar y cuidar el orden y la paz entre los argentinos.

No hay derecho, señor presidente, a que se puedan realizar imputaciones de esta naturaleza respecto de nuestra bancada. Nuestra vocación por la libertad no se da sólo en el campo político, sino también en el campo económico y en el social, porque queremos y estamos decididos —y no dudamos de que habremos de conseguirlo— a liberar al hombre de todas las formas de opresión.

Nuestra bancada queda tranquila frente a las imputaciones que se nos han hecho porque está en el ánimo del pueblo el convencimiento de que, con la ayuda de todos los sectores democráticos del país, vamos a encaminar a la República por rumbos de construcción, alejados de todo sistema totalitario y de toda represión ilegítima. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — Señor presidente: la Cámara ha llegado al clima que, evidentemente, quería superar y que parecía superable, atento el despacho que por unanimidad se había convenido, o sea que este Parlamento estaba dispuesto a la derogación de todas las leyes represivas.

No resulta tan claro el panorama y comienzan a enturbiarse las aguas cuando se intenta trasplantar el régimen represivo y se lo incorpora al Código Penal. Desde ese instante ya no existe la unanimidad, y los sectores recuperan su fiso-

nomía, y temo que este tema pueda hacer fracasar una sesión que debió ser trascendente.

No hay ningún derecho a permanecer insensibles ante el requerimiento parlamentario de sectores que han prestado su entusiasta colaboración para alcanzar la sanción de leyes importantes para el país, y aferrarse a principios o a doctrinas que desde el mismo sector de la bancada mayoritaria están siendo cuestionados desde el punto de vista doctrinario. Resulta incomprensible que por vía de nuevas figuras delictivas estemos salpicando la legislación de fondo, y que hayamos llegado a esta encrucijada tremenda en donde el empeño, por no decir el capricho, de marcar a fuego a quienes pretenden hacer uso o abuso del derecho de revolución —falta en la que seguramente estaba incurso en otras épocas un grueso sector del partido hoy gobernante— nos coloca ahora en esta situación crítica.

Sr. Bobillo. — Y otros partidos también hicieron lo mismo.

Sr. Domingorena. — Yo estoy un tanto sorprendido ante el empeño de los señores diputados en calificar ahora como delito lo que en otras circunstancias era un timbre de honor. Tengo sobre mi banca uno de los tantos discursos pronunciados por el actual señor vicepresidente de la República, y me llama la atención que nos alarmemos ahora de los conspiradores cuando en aquellas épocas se decían cosas como las que voy a leer, registradas en la página 263 del Diario de Sesiones del 15 de mayo de 1958.

Sr. Rodríguez Vagaría. — En esa fecha tal vez había razones para decir las.

Sr. Domingorena. — Las palabras del señor diputado corroboran lo que yo estaba diciendo: a confesión de parte, relevo de pruebas.

Sr. Rodríguez Vagaría. — Es que siempre...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sirvase el señor diputado no interrumpir al orador.

Sr. Domingorena. — El señor vicepresidente, diputado de la Nación en aquel entonces, decía en el recinto —no sé si desde esta misma banca, pues era en estas proximidades donde se sentaba— las siguientes palabras: «Es decir, el proceso se inicia con la conspiración. Si no hay conspiración, no hay revolución; y si no hay revolución, no hay elección de constituyentes para que el pueblo dé un estatuto jurídico estable y no nos pongamos a discutir ahora cuál es la Constitución que impera. Si no hay conspiración y revolución, no hay este proceso final que permite que el gobierno se halle en manos de los representantes del pueblo.»

Lo que he leído significa dar estado parlamentario a la conspiración. Vale decir —insisto en lo que dije anteriormente— que si la revolución resulta favorable a los intereses del conspirador, entonces no es delito sino un timbre de honor; pero si la conspiración o la revolución puede ser negativa para nuestros intereses, entonces vamos a legislar en el sentido de que

quien instigue a las fuerzas armadas a realizar dichos actos comete un delito.

Los conceptos que he leído fueron expresados no hace mucho tiempo. No es mi propósito el obtener un dividendo barato de esta lectura...

Sr. Rodríguez Vagaría. — Que ha sido fragmentaria.

Sr. Domingorena. — ...ya que podría leer tomos enteros del derecho revolucionario proclamados en este recinto. Mi intención ha sido la de llamar a la reflexión al sector mayoritario. En efecto, ya se ha dicho aquí lo suficiente: se ha señalado el peligro de la figura delictiva que se pretende introducir en el Código Penal; se ha remarcado con énfasis el riesgo que se corre; los distintos sectores que integran este Parlamento de la proporcionalidad han pedido que no se avance sobre ese tipo de legislación de fondo. Y todos lo hemos hecho convencidos de que estamos legislando no para este presente sino para todas las épocas. Pareciera que el turno de los partidos en el gobierno es el que lleva a los sectores políticos a jugar con un determinado tipo de legislación, y esto es lo que tiene que terminar definitivamente en el país.

Quiero decir, además, que no vamos a defender el orden y la paz de la República aumentando las penalidades o fabricando nuevas figuras delictivas. La legalidad argentina depende y se condiciona por problemas más trascendentes que la sanción de esta ley. Sería irrisorio creer que porque sancionamos hoy una nueva figura delictiva, van a terminar las revoluciones o va a disminuir en su *quantum* el número de los conspiradores.

Esto es irrisorio; simplemente, mueve a risa. Son otras las cosas que tenemos que recomponer rápidamente en el país para que no exista revolución y, por supuesto, para que no existan instigadores a la revolución.

Sr. Di Leo. — Es el buen gobierno.

Sr. Domingorena. — Efectivamente, hay que hacer buen gobierno; pero para hacer buen gobierno no es suficiente decir que el gobierno tiene buen rostro o que es manso o que es tolerante. Este puede ser un gobierno bueno; pero si no es capaz de emprender una acción eficiente al servicio de las estructuras que están pidiendo a gritos el paso necesario para aventar lo que tiene a la República aherrojada, anquilosada en su proceso, seguramente que vamos a quedar con el rótulo del gobierno bueno, pero habremos fracasado en la tarea revolucionaria que la República está exigiendo.

De tal manera que, cuando me hablan de gobierno bueno, yo les respondo que el gobierno bueno tiene que ser, más que aquel que muestra el rostro manso, el que se atreva a decidir y resolver los problemas de fondo que aquejan a la Nación.

El gobierno bueno puede estar manteniendo seiscientos mil hombres en la desocupación; el gobierno bueno puede estar posibilitando con

su inercia el cierre de las fuentes de trabajo; el gobierno bueno puede estar empapelando a la República; el gobierno bueno puede estar tratando de modificar la Corte Suprema de Justicia para introducir también el tinte político en la justicia; el gobierno bueno puede estar también cruzado de brazos frente al incesante aumento del costo de la vida; el gobierno bueno, en definitiva, puede ser también aquel que nada haga, pero que de tanto no hacer, muestra jactanciosamente su incapacidad de realizar algo positivo para el país.

Como el tiempo reglamentario no me da derecho a abundar en detalles, expresaré concretamente que nuestro bloque no admitirá de ninguna manera que se pretenda crear ahora la figura de la delación en el Código Penal. Al resistirnos a ello, subiendo nuestro tono, que ha sido durante todo el debate ajustado a la posición del partido de evitar que pueda violentarse la legislación de fondo, queremos decir que nuestra resistencia va más allá de las palabras que en este momento en su nombre pronuncia el presidente del sector.

Queremos decir que tampoco admitiremos con nuestra presencia la incorporación de este artículo en el Código Penal. No nos retiraremos todavía. En muchas oportunidades hemos tenido la satisfacción de que nuestra argumentación haya servido para disuadir al sector mayoritario. Creemos en la persuasión; creemos que las palabras sirven también para advertir y llamar a la reflexión. No somos de los políticos que quebramos el quórum antes de hablar o que nos retiramos antes de que se nos argumente en contra. Hemos permanecido en el recinto lo suficiente para saber si la argumentación que se daba podía cambiar nuestra opinión al respecto. Desgraciadamente, las interrupciones y la forma de expresarse de los informantes del sector mayoritario nos ponen en la evidencia de que esta disposición, que afanosamente se persigue incorporar a la legislación de fondo, quebrada hoy por el capricho de transplantar leyes represivas a la legislación penal, demuestra que tal vez nuestra exhortación de nada sirva. De cualquier manera, dejamos así planteadas las cosas.

No alardeamos del retiro que podría hacer esta bancada, y que lamentamos muy de veras, porque no acostumbramos irnos en medio de la pelea; pero si nuestro retiro sirve para que el Código Penal no recoja la infamia de una figura delictiva que convierta a la República en un semillero de delaciones, este bloque, preservando la legislación de fondo, no defendiendo el color de un partido político, está dispuesto a quebrar el quórum — como reglamentariamente puede hacerlo — y a dejar que quienes se consideran con fuerza y con convicción suficiente como para realizar este atentado a la legislación carguen con la responsabilidad de hacerlo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Confieso que no me sorprende este injerto subrepticio, que se pretende hacer a través de este inciso, de una figura delictiva nueva, destinada a usos no confesados. Desde esta banca he dicho que este gobierno, el del bloque mayoritario, es el gobierno de la simulación democrática y que pretende hábilmente utilizar todos los resortes políticos para llegar, incluso, hasta el fraude electoral. De modo que la reiteración de mi afirmación no puede sorprender a los señores diputados.

Dije en una intervención anterior que no obstante haber firmado un despacho en oposición a la modificación del Código Penal, habíamos tenido que abdicar de esa posición doctrinaria para que se sancionara la derogación de la legislación represiva, y que íbamos a intervenir en el debate en particular en el que aportaríamos las argumentaciones correspondientes. Nos parecía que era necesaria cierta elasticidad para poder oponer argumentos con el fin de destruir figuras como ésta.

Y en este momento yo también le digo cordial y parlamentariamente al bloque de la primera minoría que tengo derecho a sospechar que estas figuras delictivas han sido incorporadas así subrepticamente, quizá para que no se derogue la legislación represiva, porque se la deroga aparentemente y se la reemplaza por otra, o para que esta Cámara no tengo número suficiente para derogar realmente esa legislación represiva. De esto evidentemente es responsable la primera minoría de la Cámara. Si es cierto que ese sector político quiere realmente la derogación de la legislación represiva...

Sr. Di Leo. — Ustedes la mantuvieron cuatro años.

Sr. Gómez Machado. — No es exacto, la derogamos, pero a la vez le recuerdo que nosotros tuvimos que luchar permanentemente contra la conspiración organizada por muchos hombres de ese sector.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Recuerdo, por ejemplo, que el actual secretario de Comunicaciones Pagés Larraya es un conspirador público, colorado decidido...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Gómez Machado. — Quería decir a esa bancada, que tiene terroristas en su partido, que está a tiempo de salvar todavía la derogación de la legislación represiva, si es que lo quieren hacer. Pero advertimos que esta vez no solamente votaremos en contra, sino que, de ninguna manera, rubricaremos con nuestra pre-

sencia la infamia que se quiere introducir a través de esta figura delictiva nueva, que es una instigación a la delación reglamentada en el Código Penal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Señor presidente: los esfuerzos dialécticos, muy ponderables por cierto, que han realizado los señores diputados Domingorena y Gómez Machado por derivar este debate sobre la derogación de la legislación represiva y reformas al Código Penal hacia escabrosos caminos políticos, no han podido disimular de ninguna manera las motivaciones reales de su actitud en este recinto.

Yo señalo con sorpresa la actitud del señor diputado Domingorena, que en este recinto muchas veces nos ha recriminado a los hombres del radicalismo del pueblo el recordar el pasado inmediato. Y ahora cae él en el pecado de que nos acusaba, y viene a recordar el pasado inmediato para justificar una actitud injustificable que pretende asumir su bancada.

Sr. Domingorena. — De ninguna manera; es sólo una cita. Podría hacer muchas más.

Sr. Bobillo. — El señor diputado Domingorena nos ha acusado y ha imputado a los hombres de este sector actitudes que pudo o no asumir el radicalismo en otro tiempo. Señalo que esta bancada y nuestro partido han llegado al gobierno sin mirar hacia el pasado y sí al futuro, con un afán de construir y rehacer la República, de sacarla del marasmo de errores en que la sumieron otros hombres y otras épocas, sin declinar por cierto nuestra responsabilidad en el pasado histórico argentino.

Los hombres jóvenes que están esperando la construcción y la reconstrucción de la República se muestran conmovidos y preocupados...

Sr. Arana. — Hace un año y medio que están reconstruyendo.

Sr. Bobillo. — ... por la actitud destructiva de los sectores que en este recinto pareciera que quieren eludir la sanción definitiva de este proyecto de ley, que significa el cumplimiento de la palabra comprometida por este partido antes del 7 de julio.

No se trata de un injerto subrepticio. El proyecto del Poder Ejecutivo vino con el inciso que se está discutiendo. No es un agregado de última hora que ha hecho esta bancada en el recinto. Era conocido por todos los sectores. No se trata de ninguna infamia. El Poder Ejecutivo y esta bancada, con toda lealtad, han sometido su proyecto a la opinión pública. No hemos venido en una madrugada o con un quórum forzado a imponer una sanción al pueblo de la República. No se puede decir aquí con sinceridad y responsabilidad, que éste es el gobierno de la simulación democrática.

Yo elevo mi protesta vehemente contra esas afirmaciones. Este gobierno ha dado pruebas

suficientes de su irrevocable decisión de realizar, como decía el señor diputado Roberto, hace pocos días, la revolución que este país está esperando: la afirmación de la libertad en la democracia y en el respeto pleno de las instituciones republicanas y, por cierto, de la dignidad humana.

No quiero levantar mi dedo acusador, pero no sé si las voces acusadoras que se alzan para atacar al gobierno radical tienen autoridad para hacerlo o para hablar de democracia y de respeto a la voluntad popular. Nosotros no hemos anulado elecciones, ni hemos hecho pactos, ni actuado en contra de la voluntad del pueblo, sino que con limpieza y lealtad estamos defendiendo la libertad y la democracia argentina.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ruego a los señores diputados que no interrumpen al orador.

Sr. Bobillo. — Estas reacciones pueden ser justificadas, y yo las comprendo. Se nos imputa la comisión de un futuro fraude electoral. Yo afirmo que quizás lo que se quiere realmente es que no se derogue la legislación represiva ni la proscripción del peronismo. Saben bien la Cámara y la República que nosotros no necesitamos especular electoralmente con la proscripción del peronismo. La fuerza moral de nuestras convicciones y de nuestro pasado nos impulsan a confiar en el destino de la República y en su pueblo.

No necesitamos recurrir a la movilización de los obreros ni a la prisión por motivos políticos o gremiales. Hemos soportado las mismas situaciones difíciles por las que han atravesado otros gobiernos en el pasado, sin recurrir a la fuerza y a la violencia. El respeto del radicalismo por la libertad del hombre argentino y por su dignidad le ha impedido implantar el estado de sitio para hacer frente a esas situaciones difíciles, y hemos mantenido la serenidad cuando muchos sectores nos pedían la violencia para combatir al movimiento obrero. Nos bastó con la dignidad de nuestra actitud y con la medida de un presidente que no necesita de los sables para imponer su voluntad, pues le basta la ley y el respeto pleno de la Constitución, lo que está configurando una verdadera revolución en nuestro país.

El abandono del recinto por algunos sectores y el anuncio que hacen otros no significa de ninguna manera demostrar voluntad para rehacer la República, ni tampoco convicciones democráticas. Si este sector se impone en una votación a los deseos o doctrinas de otros sectores, no lo hace ni con la violencia ni con la fuerza de su número, sino con la colaboración de otros sectores. Está en las manos de otros bloques poblar sus bancas si es que pretenden derrotarnos en la votación.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega a los señores diputados no interrumpen al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Los sectores que abandonan el recinto demuestran que no están dispuestos a aceptar la convivencia de la democracia. Pero nosotros continuaremos respetándola y mantendremos nuestra conducta como hasta el presente, mal que les pese a quienes están tratando de destruir la base moral de este partido y de este gobierno que por suerte tiene hoy la República. No nos arredran los ataques ni las falacias. Vinimos a construir y construiremos, con libertad, en paz y con dignidad. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Muniagurria. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una moción de orden, tiene la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Señor presidente: dadas las circunstancias en que está planteado el debate y las expresiones vertidas, me permito hacer indicación de que la Cámara pase a un breve cuarto intermedio de quince minutos.

Sr. Luco. — Apoyado.

Sr. Bravo (C. A.). — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Con referencia a la moción de orden formulada?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Cuando en la Comisión de Labor Parlamentaria nos reunimos los representantes de todos los sectores políticos de esta Cámara y aunamos criterio con respecto al despacho en debate, eliminando algún inciso del artículo 213 bis propuesto, lo hicimos con el compromiso de todos los bloques que habían asistido a la reunión de permanecer en el recinto hasta que se sancionara la derogación de la legislación represiva.

Con sorpresa advierto que el bloque de la democracia cristiana, que había tomado ese compromiso por intermedio del señor diputado Reñé, anuncia, a través del señor diputado Vedia, que se retira del recinto haciendo uso de un derecho legítimo de las minorías, que es legítimo mientras no importe la deslealtad de traicionar la palabra empeñada en el seno de la comisión, que era de permanecer en el recinto.

Lo mismo ocurre con una de las partes de la UCRI. A través del señor diputado Sago, había contraído igual compromiso. Su presidente, el señor diputado Domingorena, disfrazando la verdadera interpretación del artículo...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Bravo: la Presidencia le había concedido la palabra para referirse a la moción de orden del señor diputado Muniagurria.

Sr. Bravo (C. A.). — A ella me voy a referir. Estoy haciendo esta relación de antecedentes para poner en evidencia las conductas y desconductas de algunos legisladores y de algunos bloques.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Las mociones de orden no se discuten. La Presidencia le había concedido el uso de la palabra al señor diputado al solo efecto de una aclaración relativa a la moción de orden.

Se va a votar la moción de orden de pasar a un breve cuarto intermedio formulada por el señor diputado Muniagurria.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un cuarto intermedio de quince minutos.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 19.

—A la hora 21 y 5.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Sr. Vedia. — Señor presidente: los bloques que expresaron su disidencia con respecto al inciso 3º del artículo 213 bis y quienes por oponernos a él nos retiramos del recinto, hemos acordado retornar a las deliberaciones con el propósito principalísimo de facilitar en la fecha la derogación de la legislación represiva que estamos considerando, teniendo en cuenta el ofrecimiento hecho por el bloque del radicalismo del pueblo de eliminar la palabra «privadamente» del inciso en cuestión como base de la votación que va a efectuarse. Claro está que hemos retornado para continuar las deliberaciones manteniendo siempre nuestra disidencia total con respecto a este inciso, por lo que votaremos en contra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Señor presidente: la comisión no tiene inconveniente en eliminar del inciso la palabra «privadamente», pero debo señalar, lo más objetivamente posible, la razón que nos impulsa a ello.

No está en la intención del inciso que propugnamos considerar los delitos de rebelión ni de sedición que pertenecen a otro título del Código Penal. Nos preocupa fundamentalmente en este inciso 2º del artículo 213 bis el mantenimiento del orden público, exclusivamente, y para que pueda interpretarse que la inclusión de la palabra «privadamente» importe premiar la delación o la denuncia, es que accedemos a eliminarla, porque no queremos que quede la sombra de una duda, ya que no pretendemos

reintegrar al Código, de ninguna manera, los delitos de opinión que hemos derogado.

Procuramos, señor presidente, introducir unas suaves correcciones al Código para reencauzarlo en los requisitos de unidad, organicidad y sistemática que debe tener un Código Penal. Lamentamos que así no lo interpreten muchos señores diputados. Están en su derecho al manifestar sus opiniones, como lo estamos nosotros para emitir juicios valorativos como el que acabo de formular. En consecuencia, la comisión accede a eliminar la palabra «privadamente», manteniendo cada uno su libertad de acción para pronunciarse al respecto.

Señor presidente: debo, además, formular una aclaración de índole personal, con respecto a las expresiones que he vertido en oportunidad de pasarse a cuarto intermedio. Quiero aclarar que en ninguna forma me ha impulsado sentimiento alguno de agravio para con mi distinguido colega el señor diputado Fayiz Sago. Así ha de quedar claramente establecido en la versión taquigráfica, serenamente leída y analizada con toda ponderación, pero si no surgiera de la versión, sirvan estas palabras mías aclaratorias.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

Sr. Fernández (R.). — Como se ha aceptado la supresión de la palabra «privadamente», el inciso quedaría redactado en la siguiente forma: «Los que públicamente instigaren...»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar lectura del texto completo de la redacción final del inciso.

Sr. Secretario (González). — Es el siguiente: «Los que públicamente instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o a los deberes de la disciplina militar.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso, según el texto de que se ha dado lectura.

—Resulta negativa de 78 votos; votan 139 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde votar el inciso propuesto por el señor diputado Sandler, como nuevo agregado, que se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (González). — Dice así: «Los que constituyan o integren asociaciones que tengan por fin implantar o reimplantar sistemas dictatoriales, tiránicos o totalitarios o que atenten contra el sistema representativo y republicano de gobierno. Igual pena sufrirán cuando la asociación o sus integrantes posean, fabriquen o distribuyan armamentos de cualquier clase para el cumplimiento de sus fines. Se aplicará accesoria de inhabilitación política, gremial o para ejercer funciones públicas por el término de cinco años.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — La comisión no ha aceptado el agregado propuesto.

Sr. Vedia. — Quisiera saber, señor presidente, a qué artículo se agregaría la norma que se propone.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se trata de un nuevo inciso, señor diputado.

Se va a votar.

— Resulta negativa de 124 votos; votan 139 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia señala que habría que reconsiderar la primera parte del artículo 213 bis, incorporado al Código Penal por el artículo 3º del dictamen, en razón de que sólo ha quedado un inciso y en dicha primera parte se utiliza el plural.

Sr. Bobillo. — Precisamente iba a solicitar la reconsideración de esa redacción, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si se reconsidera la redacción del artículo 213 bis.

— Resulta afirmativa de 113 votos; votan 135 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Cuál es la nueva redacción que propone la comisión?

Sr. Bravo (C. A.). — El artículo 213 bis, que se incorpora al Código Penal por el artículo 3º del despacho, quedaría redactado así: «Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que públicamente instigare o ejecutare actos que provoquen la lucha o segregación de sectores sociales, fundados en motivos religiosos o raciales.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la redacción propuesta por la comisión.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 135 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 4º.

Sr. Reñé. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Reñé.

Sr. Reñé. — Señor presidente: durante la ausencia de nuestro bloque del recinto, hubo algunos señores diputados que hicieron alusiones a nuestro retiro, y hubo quienes lo han hecho con una agresividad inusitada, incluso personalizando.

En su exposición, el señor diputado Bravo llegó a hablar de deslealtad y de traición a la palabra empeñada, y yo me siento obligado a aclarar que aquí no ha habido ninguna deslealtad ni ninguna traición. En el seno de la comisión, lo que interesaba al bloque de la mayoría era que se tratara el despacho en forma unificada, de manera tal de asegurar la introducción de reformas al Código Penal o, por lo menos, la consideración de ese tema; y para ello insistió en que se hiciera un solo despacho, porque sabía que nos interesaba la derogación

de la legislación represiva. Por consiguiente, el compromiso fue el de tratar todo el tema; pero no se habló, ni hubo compromiso en tal sentido, de retirarse o de no retirarse, compromiso que no podía asumir por cuanto en mi bloque no habíamos hablado del tema y, en consecuencia, no podía encadenarlo con una obligación contraída a título personal.

Simplemente quería hacer esta aclaración, para que constara que la democracia cristiana no ha faltado ni faltará a la palabra empeñada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 4º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 85 votos; votan 133 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — En el artículo que recién acaba de aprobarse se ha deslizado un vicio de forma, y como constituye el segundo apartado del artículo 218, me voy a permitir leer la primera parte, que dice: «Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellos fuesen cometidos contra una potencia aliada de la República en guerra contra sus enemigos comunes.»

Yo pediría que se suprimiera la palabra «también» en este artículo que acaba de sancionarse, y en su lugar se dijera «así mismo», para lo cual tal vez sería necesaria una reconsideración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la reconsideración del artículo 4º, a fin de permitir la modificación a que acaba de hacer referencia el señor diputado Bilbao. Se necesitan dos tercios de votos.

— Resulta negativa de 80 votos; votan 128 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Simplemente para aclarar que vamos a votar en contra del despacho de la mayoría, porque lo haremos a favor del nuestro, que, como ya he dicho, reproduce el proyecto del señor diputado Palacios.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Nosotros vamos a votar afirmativamente el despacho de la mayoría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Reiterando las razones expuestas en ocasiones anteriores, nuestro bloque va a votar negativamente el despacho de la mayoría. Al respecto cabe hacer algunas consideraciones de tipo particular para afianzar nuestra postura.

Entendemos que la redacción en sí de las disposiciones que a partir del artículo 4º incriminan algunas actividades delictuosas en per-

juicio de la administración pública son imperfectas y, en realidad, sientan un principio jurídico de extrema peligrosidad para sancionarlas sin la complementación de otras normas que establezcan, en forma definida, la naturaleza del delito que estamos incriminando. Me refiero concretamente a la disposición del artículo 268, que crea una especie de inversión de la prueba y una presunción de dolo en todos los actos de los funcionarios de la administración pública que no pudieran justificar, a requerimiento, la procedencia de sus bienes.

Entiendo que esta materia, por estar vinculada estrechamente al derecho administrativo, debiera integrar, como lo hace el proyecto suscripto por el señor diputado Muñiz, una serie de normas de tipo penal y de tipo administrativo que la hagan eficiente. De tal manera que, aun cuando participemos de la inspiración ética del proyecto de la mayoría, por las razones de orden general que dimos al discutirse oportunamente el despacho, y por las de tipo particular que acabo de verter, el bloque justicialista va a votar negativamente todas estas disposiciones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Avila.

Sr. Avila. — Nuestro bloque va a votar afirmativamente el despacho de la mayoría, considerando los elevados fines que se persiguen con esta reforma del Código Penal. Pero, en lo que respecta al artículo 268^a, repetimos las expresiones del señor diputado Caro. Consideramos que la inversión de la prueba va a colocar en una difícilísima situación jurídica a un elevado número de habitantes. Por eso, exhortamos a la Honorable Cámara a que se aboque con toda seriedad al estudio de este asunto, a efectos de que, entre todos, podamos esbozar un artículo ecuánime, justo, y no dejar pendiente la duda sobre la honorabilidad de la mayor parte del pueblo argentino.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — Al fundamentar en general su despacho, nuestro bloque manifestó por qué se iba a oponer a la introducción de nuevas figuras delictivas en el Código Penal: por razones de sistemática y de respeto al código vigente.

En esta materia del enriquecimiento ilícito de funcionarios estamos de acuerdo plenamente con su inclusión futura. Más aún, ratifico que existe un decreto ley, el 4.778/63 —que ahora se deroga—, en cuyo artículo 15 se legislaba sobre la materia. Además, en el proyecto de código del Poder Ejecutivo, de 1960, se establecían cláusulas semejantes a las que ahora propone el Poder Ejecutivo.

Entiendo que es muy peligroso legislar en este instante. Más aún, considero que es más completo el proyecto del señor diputado Palacios. Se propone ahora la inversión de la prueba, que mencionó el diputado preopinante, sir

otorgar ningún arma valedera de defensa al funcionario público. Es fácil, para la gente que no ha sido gobierno, creer que con una ley de este tipo se puede terminar con los que nosotros llamamos ladrones públicos. No es así. La mayoría de los funcionarios públicos, de gobiernos anteriores y de éste, fueron y son acusados con inexactitudes, villipendiados y difamados, sin posibilidad de réplica. Estoy de acuerdo en castigar severamente al funcionario público, más aún porque debe estar al servicio del pueblo. Incluso, se le podría exigir la inversión de la prueba, pero habría que darle entonces alguna posibilidad de defensa; habría que hacer el registro patrimonial de funcionarios; habría que determinar quiénes pueden hacer la denuncia y en qué condiciones. Porque la denuncia sale inmediatamente en los diarios, provocando el escándalo; corroe inmediatamente al funcionario y a su familia. En cambio, la aclaración posterior, a través de un juicio, sólo es conocida por dos o tres amigos, pero ignorada por la gran mayoría.

Doy el claro ejemplo de Pájaro Blanco, al que me referí en otra oportunidad sin terminar el concepto. Ese asunto fue investigado a raíz de una denuncia publicada por un diario contra ministros y secretarios de Estado. La comisión, presidida por el señor diputado Domingorena, e integrada por diputados de nuestro sector y también por algunos, como el señor diputado Damiani, del sector de la mayoría, se dio a la tarea seria, severa y profunda de averiguar con exactitud si habría o no gente comprometida. Se hizo la investigación, se recorrieron distintos sectores de la República que pudieran aportar pruebas. Fuimos varias veces a Santa Fe y se hizo declarar a quienes en alguna medida habían intervenido en ese *affaire*, y, en definitiva, el señor Pedro Duhalde, hombre insospechado y adepto al Radicalismo del Pueblo, determinó que en el caso de Pájaro Blanco había un negocio y no un negociado, que él mismo había formalizado y que él también era propietario de una parte del paquete accionario.

Sin embargo, aún en la actualidad, el asunto de Pájaro Blanco sirve para que algunos sectores y algunos ingenuos de la política argentina señalen como culpable a otro sector de lo que, en definitiva, no es más que la falacia de un gran diario que en ese momento no estaba al servicio de los intereses del país, sino que buscaba la derrota de un gobierno.

¿Cuántos de ustedes creen con sinceridad que en el caso de Pájaro Blanco no hubo negociado? Sin embargo, hay un libro con numerosas aclaraciones, y si tienen dudas pregúntenle a Pedro Duhalde, que conoce bien el asunto.

Todo lo que he expuesto puede ocurrir con cualquier funcionario de la República. Nadie va a leer las aclaraciones posteriores y se recordará siempre el escándalo. Hay que proteger al funcionario. Es inexacto que en la adminis-

tración sean todos ladrones; de lo contrario, ¿cómo podrían gobernar ustedes con la honradez que dicen si en la administración todo estuviera podrido?

Sr. Damiani. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sago. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Damiani.

Sr. Damiani. — No quería ya más en mi vida parlamentaria volver a referirme a este asunto de Pájaro Blanco, que en su momento juzgó la mayoría parlamentaria que en ese entonces actuaba en este recinto.

Pero el señor diputado Sago ha traído nuevamente ese problema, y como fui miembro informante de despacho de la minoría, tengo que formular algunas aclaraciones.

Sostuve en esa oportunidad que hubo negociado, pero que éste no se podía comprobar por el régimen de anonimato de las acciones. No puedo silenciar en este momento mi convencimiento pleno de que hubo negociado; si no se pudo demostrar fue porque tampoco se pudo comprobar quiénes eran los tenedores de las acciones por las circunstancias que ya he señalado.

Sr. Sago. — ¿Rige actualmente el régimen de anonimato de las acciones? La duda que expresa el señor diputado, que yo acepto porque la sé honrada, queda y va a quedar en cada acusación que se haga contra un funcionario de la República. Pero ustedes, los radicales del pueblo, pueden salir de esa duda consultando a don Pedro Duhalde.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Damiani. — Cuando hice mi informe demostré que el señor Pedro Duhalde, a quien considero una persona de acrisolada honestidad, había actuado en la transacción de Pájaro Blanco como comisionista. En realidad, no era él en persona, sino la sociedad Pedro Duhalde y Compañía.

En el libro que ha mencionado el señor diputado Sago, las declaraciones de don Pedro Duhalde demuestran que está exento de toda culpa en ese asunto y que su única actuación es la que ya he mencionado, es decir la de actuar como comisionista en una transacción comercial.

Pero ahí no está, según lo demostré en el recinto en esa oportunidad, lo que considero negociado del Pájaro Blanco. El negociado y los cómplices del Pájaro Blanco estaba en el anonimato de las acciones, en quienes compraron el paquete accionario, es decir, una sociedad anónima llamada Wall Street Investment, con un domicilio ficticio en Nueva York. En esa oportunidad, los informes del Poder Ejecutivo y las investigaciones que realizaron éste y la justicia se basaban en referencias del procurador de Estado del Uruguay, llamado Lecueder —si mal

no recuerdo, porque han pasado varios años—, y fue casualmente el que había fundado la sociedad anónima citada. Y se desprendía de los hechos, a mi juicio —está la versión taquigráfica y el informe a que el señor diputado Sago acaba de hacer referencia—, que esas dos investigaciones —la del Poder Ejecutivo y la de la justicia— se basaron en ese informe del señor Lecueder, que era a su vez fundador y organizador de la sociedad anónima Wall Street Investment, compradora del paquete accionario de la Sociedad Anónima Pájaro Blanco y realizador del negociado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del artículo 144 del reglamento.

Sr. Secretario (González). — El artículo 144 dice: «En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del debate, no pudiendo, por consiguiente, aducirse consideraciones ajenas al punto de la discusión.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sago, a quien la Presidencia exhorta a ceñirse al tema en debate.

Sr. Sago. — Quisiera solamente hacer una pregunta: ¿cuántos ministros o secretarios de Estado de entonces participaron de ese supuesto negociado?

Sr. Domingorena. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sago. — Sí, señor diputado.

Sr. Domingorena. — No voy a abundar en mayores consideraciones en un problema que creo que ya está superado, y que además la mayoría de la Cámara no conoce y no estará en autos con este diálogo...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Además, reglamentariamente no corresponde considerarlo.

Sr. Domingorena. — Así es, señor presidente.

Simplemente, quiero acotar lo siguiente, que tal vez traiga luz sobre el asunto. El señor diputado Damiani ha dicho que ese supuesto negociado se basaba, seguramente, en el anonimato de las acciones; y piensa que en virtud del anonimato de las acciones no puede establecerse con precisión qué grado de responsabilidad tuvieron quienes intervinieron en lo que para él es un negociado.

Desde el punto de vista del señor diputado la afirmación es correcta. Pero vayamos al hecho en sí, que es adonde quería llegar el señor diputado Sago, pues ya había insinuado el argumento.

¿Es posible que porque estemos en presencia de un negocio donde en virtud del anonimato de las acciones no se puede determinar con precisión —se ha reconocido que es así— qué personas pueden estar incursas en el supuesto delito, podamos echar la sospecha y formular cargos concretos a funcionarios? Y dejo a un lado a todas las otras personas que ha nombrado el señor diputado Damiani, porque estamos en la defensa, creo, de los funcionarios públicos, y no de las personas en sí. En virtud del anoni-

mato de las acciones, ¿podríamos, con fundamento y seriedad, formular cargos, así porque sí, sobre determinados funcionarios? ¿No le parece a la bancada mayoritaria que así como ayer nosotros tuvimos que soportar este tipo de calumnia y de injuria, podría ya mismo —porque no ha sido derogada la ley del anonimato de las acciones— ser sospechado caprichosamente alguno de los hombres del gobierno? ¿Y parece correcto que por ese funcionario, en virtud de esta legislación —que para el sector mayoritario es deficiente y sobre la que me parecería bien que se presentara un proyecto para su reforma— tuviera la opinión pública la imagen de un partido en función de gobierno que está amparando a los delincuentes? Este es el problema.

He querido decir esto con la mayor serenidad, para que volvamos al punto que se está debatiendo —que es el enriquecimiento de los funcionarios públicos—, olvidándonos de los particulares que pudieron o no incurrir en negociados y salvando la dignidad de los funcionarios a quienes no se pudo acreditar nada pero que, so pretexto del anonimato de las acciones, caprichosamente aparecieron envueltos en las sospechas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — Precisamente, yo quería destacar ese sentimiento que abriga mucha gente contra el funcionario público y ese pensamiento señalado por el señor diputado Damiani, que indica que el hecho existe pero que no lo puede probar. Ese es el peligro. Por eso insisto en que al funcionario hay que reconocerle amplia posibilidad de defensa.

En 1959 el señor diputado Domingorena presentó un proyecto instituyendo el derecho de réplica, no sólo para el funcionario sino para cualquier ciudadano. En virtud de ese derecho, que es justo y necesario, el injuriado podía hacer publicar, inmediatamente, una declaración en el mismo periódico, con la misma extensión y en la misma página en que había aparecido la injuria, aclarando conceptos.

Esto hay que hacerlo porque, ni el gobierno actual ni otro que lo suceda están extentos de que se les dirija caprichosamente una serie de denuncias, con finalidad aviesa, sin que los funcionarios puedan realmente defenderse.

Estimo que todo esto pertenece a una concepción jurídica un poco más amplia. Incluso estoy de acuerdo con la inversión de la prueba, que ya existe en la provincia de Buenos Aires a propuesta de nuestro gobierno, porque hay que dar al funcionario la posibilidad suficiente para que se defienda y no queden sin castigo los calumniadores e injuriadores. Si la bancada mayoritaria se comprometiese a discutir el derecho de réplica, el registro de los funcionarios públicos y una serie de instituciones que permitiesen al funcionario la posibilidad de acre-

ditar su decencia, creo que procederíamos correctamente, legislando como corresponde; pero legislar en esta forma, tan apresuradamente, me parece peligroso. Es únicamente por este último motivo que nos vamos a oponer a la introducción de este capítulo al Código Penal.

El proyecto de código de 1960, que nuestra bancada propicia, tiene incluido un capítulo sobre la materia que, en algunos aspectos, coincide con el propuesto por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — Al fundamentar en general nuestro dictamen señalamos una disidencia con el artículo 268^a propuesto. Dijimos entonces que nos pronunciábamos en contra porque en ese artículo se desconocían principios tradicionales del derecho procesal penal argentino, en virtud de los cuales se afirma la presunción de inocencia y, por consiguiente, la obligación del acusador público de probar la acusación que se dirige hacia una persona. Sin embargo, meditando mejor sobre este artículo, yo diría que se incurre en algo mucho más grave, y que configura el delito de sospecha de manera evidente.

Me voy a permitir leer el artículo, haciendo notar en qué consiste nuestra sustancial objeción. La disposición establece: «Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario que debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento excesivo patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.» Tal como está redactada la norma, quedaría configurado el delito con la sola negativa del empleado a dar las explicaciones necesarias ante la intimación para que dé razón de su enriquecimiento.

Yo concluyo, entonces, señor presidente: configurado el delito, el proceso se abrirá y ni siquiera se admitirá la prueba en contrario, porque el delito estaría consumado tal como la norma lo estructura. Basta la sola negativa a dar las explicaciones sobre su enriquecimiento para que se halle configurado el delito de sospecha. Habría entonces algo mucho más grave que la inversión de la prueba, mucho más grave que la obligación del reo de probar su inocencia, que ya es muy grave, y que importa una discrepancia fundamental con normas que tradicionalmente han regulado nuestro derecho penal procesal. Implicaría un delito formal de una gravedad tremenda, porque muy bien puede resultar que si ese funcionario es digno, se niegue a dar explicaciones ante la sospecha injusta, y este gesto de dignidad sea aprovechado por quienes lo denigran para inculparle un delito en el cual ya se habría colocado por el solo hecho de su negativa.

Por lo expuesto, pediría a la Honorable Cámara que medite seriamente ante esta norma

tal como está reestructurada. Si extremando el rigor se la quiere mantener, habría que introducir alguna modificación que permitiera que durante el proceso el funcionario pudiera probar su inocencia, porque de lo contrario estableceríamos una norma tan rigurosa y de tal naturaleza que discreparía con todas las disposiciones de nuestro Código Penal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Maldonado.

Sr. Maldonado. — Señor presidente: entiendo que el asunto que estamos considerando es una de las más trascendentales reformas que se proyecta introducir a nuestro Código Penal. No veo el motivo por el cual pueda considerarse que este precepto legal, una vez sancionado, pueda ser instrumento, motivo o causa para llevar a cabo actos arbitrarios o de injusticia en contra de ningún funcionario público.

Más, todavía, señor presidente. La opinión unánime de la República exige sanciones drásticas en contra de quienes, valiéndose de la función que desempeñan, han aumentado su patrimonio o pueden aumentarlo en una forma realmente inmoderada y que no tiene justificación ni explicación lícita alguna. La opinión de la República —decía que por casi unanimidad—, no sólo aceptará complacida esta modificación, sino que, incluso, es frecuente oír a personas que piden hasta la pena de muerte para los que se llama comúnmente ladrones públicos. Hay que terminar, por lo menos, con la sospecha, injustificada muchas veces, pero también plenamente aceptable en otras.

Es por eso que creo que esta modificación proyectada es lo más trascendental en el derecho penal en nuestra República.

Por estas breves razones, dejo manifestada mi opinión absolutamente favorable a la reforma que consideramos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Este bloque de la democracia cristiana va a votar afirmativamente el artículo 5º, que se está considerando. Y lo hará así porque comparte plenamente la necesidad de reprimir, severamente los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de la función pública y no porque piense que la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública sea norma habitual en nuestra administración. Felizmente, no es así. Pero esta modificación está bien, incluso en resguardo de tantos funcionarios anónimos y honrados sobre los cuales cae el lodo que producen la falta de honradez o la irresponsabilidad de algunos funcionarios que se sirven de la administración en lugar de servirla. Que se apliquen a éstos las penas con el mayor rigor. Además, ésta sí es una materia en la cual hay cuantiosos antecedentes y, a mi juicio, están bien previstas, en general, las normas que aquí se establecen.

Compartimos, de la misma manera, el principio de la inversión de la prueba, porque nos parece que, en este aspecto, es el único medio idóneo para acreditar fehacientemente la responsabilidad del funcionario. No creemos que, con esta disposición, quede el funcionario público sometido a cualquier requerimiento irresponsable o hecho con propósitos de daño moral. El artículo 268ª habla del funcionario «que debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento excesivo patrimonial», y, naturalmente, la reglamentación de la ley tendrá que determinar cuáles serán los casos en que el funcionario puede ser requerido en este sentido.

Sr. González Bergez. — ¿Me permite una breve interrupción, señor diputado?

Sr. Vedia. — Sí, señor diputado.

Sr. González Bergez. — Para recordarle que los códigos de fondo no se reglamentan.

Sr. Vedia. — Tiene razón el señor diputado, pero la expresión «debidamente requerido», a mi juicio, salva la posibilidad de que el funcionario pueda verse sometido a cualquier tipo de requerimiento.

La observación que deseo hacer a estos artículos se refiere a la desproporción que me parece advertir entre la pena que se impone al funcionario o empleado público que recibe la dádiva y la que se impone al que ofrece la dádiva, porque para este último caso, la pena que se prevé es la mitad de la que se proyecta aplicar a aquel que recibe la dádiva. No encuentro razón alguna para ello, y tal vez el miembro informante de la comisión pueda aclarar cuál es el sentido de esta desproporción. A mi juicio, ambas penas, por lo menos, debieran ser iguales, porque tanto más grave es el hecho del ofrecimiento de una dádiva para corromper al funcionario, como el hecho del funcionario que se deja corromper.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Dije al comienzo que íbamos a votar afirmativamente este artículo, pero voy a solicitar que se vote por partes, porque advierto que engloba modificaciones a distintos artículos del Código Penal. Cuando hice aquella afirmación, me refería al artículo 5º en general.

Nosotros sabemos cómo se utilizó la bandera de la moralidad administrativa por los sectores reaccionarios frente a gobiernos que en este país han intentado de algún modo modificar las estructuras económicas. Pero pasamos por encima ese proceso, para no entrar al debate político, y entendemos también que al funcionario que delinque hay que sancionarlo como corresponde. Sin embargo, nos alarma, especialmente después de las expresiones vertidas por el miembro de la comisión integrante del bloque de los partidos de centro, el estableci-

miento del delito de sospecha, así, como un delito formal.

Quiero advertir especialmente al sector de la primera minoría, que tiene la responsabilidad del gobierno en este momento, que no se deje llevar por el canto de sirena de la demagogia y recuerde que los funcionarios públicos requieren un mínimo de garantías para el ejercicio honrado de sus funciones. No puede ser que frente a la argumentación jurídicamente legítima del señor diputado Bilbao, la Cámara no advierta que la sola imputación, y máxime dejada al decreto reglamentario la forma de establecer el requerimiento, coloca en delincuente a cualquier funcionario. Yo lanzo esta duda porque me parece que es fundamental —si se quiere ejercer el gobierno con honestidad y con seriedad— defender al funcionario honesto. Al funcionario deshonesto hay que castigarlo con todo el rigor de la ley, pero no puede el Parlamento, sin eludir su responsabilidad, dejar de defender al funcionario honesto, negándose a convertir este delito en un delito formal. Frente a esta circunstancia llamo a la reflexión al sector de la primera minoría, cuando menos para que lo modifiquemos. Anuncio que, tal como está redactado, nuestro bloque votará por la negativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Abalo.

Sr. Muñiz. — ¿Si me permite el señor diputado?...

Como faltan tres o cuatro minutos para las 22, deseo consultar a la Presidencia si reglamentariamente la sesión de hoy debe concluir a esa hora.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No, señor diputado, porque se trata de una sesión especial y no de una sesión de tablas.

Sr. Abalo. — Creo que estamos alterando la discusión. El proyecto ya se votó en general y ahora en particular estamos de nuevo discutiendo en general un artículo que tiene cinco incisos. No es posible discutir el inciso 268⁴ cuando todavía no hemos considerado los otros tres anteriores del artículo 5⁹. Debemos considerar inciso por inciso y formular respecto de cada uno las observaciones que se crean oportunas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado De Cara.

Sr. De Cara. — Consecuente con la postura adoptada por el bloque demócrata progresista durante la discusión en general, vamos a votar por la negativa. Ello no implica que no consideremos necesario legislar sobre la materia, pero por razones orgánicas y metodológicas nos oponemos a esta política de parches y remiendos en el Código Penal.

No obstante lo expuesto, quiero también señalar la improcedencia del artículo 268⁴. Es sumamente peligrosa la inversión de la prueba; de modo que, a nuestro criterio, la Cámara de-

berá examinar exhaustivamente ese artículo antes de proceder a su votación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Carlos Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Es para sugerir, señor presidente, que se voten los incisos de este artículo uno por uno. Cuando se considere el artículo 268⁴ será la oportunidad en que responderé a las observaciones formuladas por los señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento se procederá a la votación del artículo en cuestión, por incisos, y se reanudará la discusión en particular al llegar al artículo 268⁴.

Sr. Caro. — ¿Ello nos privaría de discutir en particular cada uno de los incisos?

Sr. Bravo (C. A.). — La indicación, señor presidente, es de que se voten los incisos anteriores hasta el correspondiente al artículo 268⁴, y de que este último inciso sea considerado en particular, en cuya oportunidad la comisión respondería a las preguntas y sugerencias formuladas por los señores legisladores.

Sr. Caro. — Entiendo que esto no obsta a que, antes de votar cada inciso, los señores diputados hagan las observaciones que crean convenientes.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En efecto, señor diputado.

Se va a votar por partes, en consecuencia, el artículo 5⁹.

En primer lugar, se va a votar el encabezamiento.

—Resulta afirmativa de 71 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el inciso correspondiente al artículo 268¹. Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 70 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el inciso correspondiente al artículo 268².

Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — A simple título de colaboración, deseo hacer una sugerencia a la mayoría de la comisión.

Entiendo que las situaciones previstas en el artículo 268³ del Código Penal, que se refieren a la revelación de secretos, son idénticas a las contempladas en el artículo 253 bis, que también se incorpora al Código Penal por el dictamen, con la sola diferencia de que a quien revela secretos por una paga se le impone una pena mayor. Es decir, se trata de situaciones jurídicas iguales, porque el daño que causa la revelación de secretos es idéntico en ambos casos. En consecuencia, ambas disposiciones deben refundirse en un solo artículo que imponga la pena menor, o sea la del artículo 253 bis; y además sugiero que, adoptando entonces el texto de este último artículo, se le agregue, al final,

los términos «cuando el secreto fuere impuesto por disposición legal».

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión no acepta la indicación del señor diputado Caro, por cuanto el artículo 268² se refiere al que revelare datos reservados con afán de lucro, mientras que el 253 bis contempla la simple revelación de hechos o acontecimientos que por ley deben quedar secretos.

Por eso, cuando consideremos el artículo 253 bis, la comisión va a aceptar el agregado propuesto por el señor diputado Caro al final de esa disposición; pero el inciso que estamos discutiendo, o sea el correspondiente al artículo 268 bis, se refiere a otra cosa: al afán de lucro y su conexión con el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

Sr. Caro. — Si me permite el señor diputado...

Entiendo que, estando incluido el artículo del Código Penal que consideramos en el título «Delitos contra la administración pública» de dicho cuerpo legal, el bien jurídico tutelado es la administración pública, y la lesión a ese bien por quien revela secretos es idéntica en el caso de que lo haga por una paga o de que actúe sin ese requisito, aunque demuestra una mayor peligrosidad tal vez en el primer supuesto. Mi proposición tiende a eliminar la distinción entre estas dos posiciones, que procesalmente va a ser muy difícil diferenciar. De esa manera, la infracción contemplada en un solo artículo sería el solo hecho de revelar secretos que deben ser guardados por ley.

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión reitera que en el artículo 268² el bien jurídico tutelado es el comportamiento del funcionario público...

Sr. Gómez Machado. — No, señor diputado; es la administración pública.

Sr. Bravo (C. A.). — ... y lo que se sanciona es su enriquecimiento ilícito —me va a disculpar el señor diputado, pero creo que está equivocado—, mientras que en el artículo 253 bis lo que se castiga es la revelación de secretos que conocen los funcionarios públicos y que tienen la obligación de guardar en reserva.

Sr. Caro. — Hay una mayor peligrosidad en el primer caso, pero el bien tutelado es el mismo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión reitera que lo que se persigue sancionar es el enriquecimiento del funcionario que utiliza los secretos en su propio beneficio, mientras que en el artículo 253 lo que se quiere sancionar es la violación de los deberes del funcionario público, no teniendo como mira el enriquecimiento sino el cumplimiento de los deberes en sí. Son dos figuras diferentes.

Sr. Schaposnik. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

Sr. Schaposnik. — Con el ánimo de aclarar las dos figuras, que son completamente distintas, el problema podría consistir en presentarlo a través de hechos que han acontecido en los últimos tiempos. Por ejemplo, sería el caso del funcionario público que revelara de alguna manera a personas de su conocimiento o de su amistad la posibilidad de la fijación de un precio mínimo para la cosecha, que permitiera comprarla, sin perjuicio para la administración pública, pero que provocara un enriquecimiento, todo ello a través de las medidas que pudiera adoptar el Poder Ejecutivo. En ese caso no habría lesión alguna para la administración pública, pero sí un enriquecimiento a través del funcionario que facilitó el dato. Este hecho ha ocurrido hace poco tiempo en nuestro país, a través de una medida que iba a tomar el Banco Central o el Poder Ejecutivo respecto de la compra de cosechas, que permitió el enriquecimiento de personas que estaban rondando alrededor de los funcionarios públicos.

Esas revelaciones del secreto permiten un enriquecimiento indebido; en cambio, los otros pueden ser secretos que interesen a la administración pública, pero que en algún caso pueden no afectarla.

Además de ello —si me permite el señor diputado Bravo, aun cometiendo un exceso—, creo que falta configurar de algún modo algún otro tipo de delito que no aparece típicamente como una retribución en dinero al funcionario público. Es el caso tan extraordinario, que ha ocurrido en los últimos tiempos, del funcionario público que, después de abandonar su cargo, aparece como accionista o integrando el directorio de empresas que han sido objeto de tratamiento preferente en la administración pública. Este es un hecho que ha acontecido con mucha frecuencia y que se ha dado en el último caso de una denuncia hecha por el señor jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que es necesario castigar en alguna forma, creando un período mínimo de sospecha de dos o cinco años, durante el cual los ex funcionarios que aparezcan como accionistas de empresas o integrando directorios deben ser inculcados junto con aquellos que han sido beneficiarios de una suma de dinero.

Y voy a explicar un hecho para que lo recoja la comisión. En la declaración hecha por una persona en el seno de la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo se dijo que no solamente el pago en efectivo podía ser la retribución que se diera por un favor recibido desde la función pública; podía ser que la comisión estribara en una acción mínima, quizás de 100

pesos, pero que tuviera el carácter de acción de fundador, la que valdría una enorme cantidad de dinero por el valor llave que representa.

En rigor, no habría un enriquecimiento, porque los 100 pesos nominales de la acción no representan nada en el patrimonio de una persona, pero sí constituyen la llave de una empresa.

De manera que es necesario incriminar a esas personas que se benefician a través de un cargo que no se sabe si ya era ejercido antes de dejar la función pública. Yo pediré después el agregado, como otro inciso, en el artículo 268.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — En cuanto a este artículo 268², nada más tiene que observar la comisión, y no acepta las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 268².

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 268³.

Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

Sr. Schaposnik. — Vamos a proponer una modificación a este artículo, fundiéndolo con el siguiente. Quedaría redactado así: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiera dádivas que le fueran entregadas en consideración a su función o empleo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.» Aquí se agregaría lo siguiente, suprimiendo el artículo 268⁴: «Será presunción inminente de autoría contra el funcionario que, debidamente requerido, no justifique la procedencia de un aumento excesivo patrimonial suyo o de persona interpuesta.» Es prácticamente lo mismo, con una diferencia en cuanto a la presunción.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega al señor diputado haga llegar a la mesa el agregado que propone.

¿Acepta la comisión el agregado que propone el señor diputado Schaposnik?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión no acepta.

Sr. Caggiano. — Que se vote.

Sr. Schaposnik. — Pido que se vote primero el artículo como está en el despacho, y luego el agregado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tratándose de un agregado se votará después.

Tiene la palabra el señor diputado Díaz O'Kelly.

Sr. Díaz O'Kelly. — Voy a hacer una ligera consideración. No pertenezco a la comisión ni éste es mi tema. Hace pocos momentos el señor diputado Sago hizo referencia a una ley que se dictó en la provincia de Buenos Aires en 1958. Fue la primera que envió el Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura. Me permito recordar simplemente a los señores diputados,

a efectos de que les sirva de orientación, que se trataba de una ley que no suponía un injerto en el Código Penal, sino que era específica, creando el registro patrimonial.

En el artículo 268, con cualquiera de las redacciones que se vote, se habla del enriquecimiento ilícito sobre el patrimonio anterior. Lo que no veo claramente es cómo se efectúa la determinación en más de algo, cuando no está hecha la determinación del acervo patrimonial del funcionario al hacerse cargo del puesto para el que ha sido electo o designado.

También recuerdo que, a pesar de que esa ley tiene vigencia desde principios del año 1958, no conozco —quizá lo haya olvidado— que nunca nadie haya accionado en virtud de ella en la provincia de Buenos Aires. No presumo, en consecuencia, que hayamos sido más o menos honestos que los hombres del resto del país. Lo que pasa es que, comúnmente, en la forma como se han establecido estas modificaciones al Código Penal, ellas serán inaplicables. Los funcionarios que quieran ser deshonestos lo serán a pesar de la redacción que, con buena fe y buena intención, queramos dar al artículo, un poco llevados por aquello de que todos los partidos, cuando están en la oposición, en alguna forma presuponen y declaman con respecto a la amplitud de los negociados del que está en el gobierno.

Mi experiencia —me permito hacer una reflexión de tipo personal— es absolutamente contraria a este concepto, lamentablemente, tan difundido. En la provincia de Buenos Aires no hubo hechos de este tipo —por lo menos que llegaran al conocimiento general en forma clara y concreta— con respecto a funcionarios de administraciones anteriores a la nuestra que hayan delinquido en la magnitud que se presume.

Con la redacción que propone la comisión, o con la del señor diputado Schaposnik, no veo cómo puede aplicarse el artículo, si no está determinado, previamente, el elemento sobre el que se pueda producir el incremento; y esa determinación no es posible, a mi juicio, sin que se cree previamente, como lo señala el señor diputado Sago, el registro patrimonial de los funcionarios públicos, tanto en cargos electivos o provenientes de designación.

Hago estas observaciones en salvaguardia de la administración pública nacional, provincial o municipal, que, partiendo de la premisa cierta y comprobada de que en su gran mayoría, o casi en su totalidad, es absolutamente honesta y sacrificada.

Sr. Bravo (C. A.). — Como las observaciones que hace el señor diputado Díaz O'Kelly se relacionan también con el artículo 268⁴, las voy a responder cuando la Cámara lo considere. Me parece oportuno que ahora votemos el artículo 268³.

Sr. Gómez Machado. — ¿Cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 268³?

Sr. Bravo (C.A.).—Lo que se procura es evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

Sr. Gómez Machado.—Pero entonces no puede ir en este capítulo.

Sr. Schaposnik.—No sólo se refiere al enriquecimiento de los funcionarios, sino también al de personas ajenas a la administración, que se benefician.

Sr. Presidente (Mor Roig).—Se va a votar el artículo 268^º.

—Resulta afirmativa de 70 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).—Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Schaposnik, que la comisión no ha aceptado.

—Resulta negativa de 88 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig).—En consideración el artículo 268^º.

Tiene la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver.—Voy a proponer que para este artículo se mantenga la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo.

La finalidad que persigue esta reforma del Código Penal no es otra que la de combatir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que, en los últimos tiempos, ha constituido lo que la opinión pública ha denominado «la corrupción administrativa generalizada».

Este flagelo que ha castigado a la administración y a la moral públicas ha sido de tal magnitud que hasta se ha llegado a perder la sensibilidad necesaria para comprender cuándo se está en presencia de funcionarios venales u honestos. En ese sentido ha habido una verdadera distorsión de valores y una displicencia en la consideración pública de funcionarios sobre los que se ha tenido la presunción y hasta la certeza de su desempeño irregular, pero que han seguido mereciendo la consideración de muchos sectores de la sociedad, precisamente por la real distorsión moral que se ha originado frente a la falta de sanciones severas para estos funcionarios venales.

Se ha señalado aquí que importaría incorporar una norma peligrosa en la legislación penal, que configuraría la existencia de un delito de tipo formal y la violación del derecho a la defensa por parte del supuestamente imputado.

Quiero expresar que esta clase de delitos por sus características generales no dejan rastros. El delito de malversación pública resulta muchas veces de difícil prueba, porque los autores se encargan con premura y con diligencia de no dejar rastros de su accionar irregular y delictivo. Por eso es que no aparece otro medio para combatir esta clase de desviaciones que el que se puntualiza en el proyecto, que no importa una inversión de la prueba y que tampoco deja

indefenso al imputado como lo voy a demostrar. Lo que el proyecto quiere, en resumen, es exigir al funcionario que acredite su enriquecimiento.

Sr. Caro.—¿Cuál es el concepto de enriquecimiento para el proyecto?

Sr. Llaver.—Yo estoy hablando del enriquecimiento...

Sr. Caro.—Un aumento excesivo del patrimonio.

Sr. Llaver.—...a que se refiere el proyecto del Poder Ejecutivo, que contiene la norma que voy a proponer en sustitución de la del despacho de la comisión. En el proyecto del Poder Ejecutivo se habla del funcionario que debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial.

El señor diputado Caro me pregunta cuál es el enriquecimiento. El enriquecimiento supone la existencia de un patrimonio muy superior al que tenía el funcionario al incorporarse a la función pública, sin estar éste en condiciones de acreditar con claridad el origen de los fondos con los cuales logró ese enriquecimiento.

Sr. Caro.—Si no establecemos un punto de referencia —el haber patrimonial del funcionario al asumir sus funciones— no podemos determinar si el enriquecimiento es excesivo o no.

Sr. Llaver.—El señor diputado se está anticipando a lo que voy a proponer, y para ahorrar tiempo le adelanto que sugeriré una cláusula que disponga la obligatoriedad de todo funcionario público de formular una declaración jurada de sus bienes al incorporarse y al cesar en sus funciones.

Sr. Díaz O'Kelly.—Si me permite, señor diputado...

A título personal puedo coincidir con la cláusula que sugiere el señor diputado. Pero si el señor diputado propone que esa declaración de bienes se incorpore por esta vía al Código Penal, me parece que ello resultará un poco contradictorio.

Sr. Llaver.—Yo lo voy a proponer; no sé si la comisión y la Cámara lo aceptarán. Tal vez no sea estrictamente una disposición que encuadre dentro de las normas del Código Penal pero señalo que las características que se imprimen a esta reforma tal vez hagan necesaria su incorporación, aun cuando ello no responda a una estricta técnica de legislación penal.

No veo cómo se produce una lesión al derecho de defensa cuando se inquiera a un funcionario o un ex funcionario que justifique la procedencia de los bienes con los que se ha acrecentado su patrimonio, si ese funcionario ha sido honesto en el ejercicio de sus funciones y el enriquecimiento proviene de otras fuentes que no son el ejercicio irregular de una función pública. No veo dónde puede estar la lesión moral que se puede producir al funcionario frente a un reclamo de esa naturaleza.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Llaver. — Sí, señor diputado.

Sr. Serú García. — El señor diputado ha facilitado la posibilidad de que fijemos con precisión — como ya lo había adelantado con claridad y elocuencia el señor diputado Bilbao — el agravio que existiría en el proyecto que consideramos al principio de la defensa en juicio, porque debemos advertir que, como fluye claramente del texto en discusión, el delito se configuraría ante la sola negativa del funcionario a justificar la procedencia de la incrementación de su patrimonio. A partir de esa circunstancia se configuraría el delito que daría lugar a la acción prevista en este artículo. A partir de esa negativa, el acusado no tendría ya oportunidad de ejercer defensa alguna, por cuanto el delito, como digo, se cometería por su sola actitud de negarse a dar las explicaciones exigidas.

Por ello, bueno es decir en esta oportunidad que si nos atenemos al texto del proyecto, es evidente que más que perseguir a los funcionarios que se enriquezcan ilegítimamente, estaríamos castigando a los funcionarios desobedientes. En realidad, la ley les estaría imponiendo la obligación de justificarse, por lo que al negarse a hacerlo cometerían el delito.

Sr. Llaver. — ¿Si me permite, señor diputado?...

Sr. Serú García. — Por ello es que se ha sostenido con elocuencia — con mucha más claridad que la mía —, por parte del señor diputado Bilbao...

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Llaver reclama el uso de la palabra, señor diputado. Además, la Presidencia señala que ha expirado el término de que disponía para su exposición el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — Voy a concluir brevemente, señor presidente.

Con respecto a la interrupción del señor diputado Serú García, debo manifestar que el funcionario que se ha enriquecido con bienes cuyo origen es legítimo, es decir, con bienes bien habidos, no puede tener ninguna causa de justificación si se niega a exhibir y comprobar el origen legítimo y limpio de sus bienes.

En este aspecto hay circunstancias que debemos tener en cuenta. Si bien es muy difícil comprobar el origen ilegítimo o irregular del enriquecimiento de funcionarios públicos, es muy fácil advertir, como ocurre a cada instante en la vida diaria, que hay funcionarios que ostentan un nivel de vida muy superior a las posibilidades económicas que pueden provenir de su retribución como empleados o funcionarios de la administración pública. Esto solo sería suficiente para probar el enriquecimiento ilegítimo.

Todos los días encontramos gentes que nos sorprenden por la holgura y el modo de vida ostentosa en que se desenvuelven con sus fa-

milias, que razonablemente no pueden proporcionarse con sus retribuciones como funcionarios de la administración.

Recuerdo que en la legislación indiana se exigía a los funcionarios de alta jerarquía aquella medida moralizadora llamada el juicio de residencia, por el cual debían rendir cuentas sobre el estado de su patrimonio y el origen de sus bienes, al terminar sus funciones. No digo que se aplique estrictamente esa institución, pero es indudable que tiene un gran fondo moral y reparador. Por lo menos, sirve para contener la propensión o generalización de enriquecerse a costa del erario en vista de la inexistencia de sanciones para ese tipo de desviaciones.

Concluyendo, señor presidente, voy a proponer que en lugar del despacho de la comisión, que se refiere a los funcionarios públicos pero no a los ex funcionarios, con lo cual quedarían indemnes o impunes aquellos que se enriquecieron en la función si no se les hizo ningún requerimiento mientras la ejercían, se vuelva al proyecto del Poder Ejecutivo, que contiene una norma más general y permite sancionar a los funcionarios y a los ex funcionarios de la administración pública. También voy a proponer concretamente que se agregue en el despacho la obligatoriedad de hacer declaración jurada en el momento de asumir la función y al cesar en ella.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

Sr. Reñé. — El artículo que se propone cuenta con el apoyo del bloque demócrata cristiano. Para nosotros la limpieza y la honradez de los funcionarios públicos es un bien sumamentepreciado y lo que conduzca a garantizar esa honradez y esa limpieza debe ser apoyado. Pero hago uso de la palabra porque he visto que este artículo ha provocado cierta alarma en algunos sectores y, según la interpretación que hago del mismo, entiendo que no hay motivo para semejante alarma.

Es cierto — y esto no podemos discutirlo — que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos resulta de muy difícil prueba, precisamente porque éstos tienen a su disposición una serie de resortes susceptibles de garantizar la impunidad de los actos ilícitos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones. Por ello resulta preciso ponerlos en condiciones de rendir cuentas y por tal razón se hace necesaria la inversión de la prueba.

Estimo que la situación se clarifica bastante cuando se avanza un poco más y se interpreta el artículo. El mismo dice: «el funcionario que debidamente requerido». Y entonces yo me pregunto: ¿quién es el que debidamente puede requerir? Esta es una norma penal, una condición que se establece y que de no ser cumplida provoca la sanción del reo. En consecuencia, únicamente puede intimar la justicia criminal. De esta manera, estamos limitando mucho el ámbito

de las posibles arbitrariedades, porque no se trata acá de un superior jerárquico o administrativo que pueda hacer la intimación; se trata de un magistrado judicial, el poder jurisdiccional que puede intimar y ante el cual necesariamente se deben justificar los extremos de la presunción que el artículo crea.

Se habla también de que no hay posibilidades de defensa. Creo que es un error. Es cierto, como dice el señor diputado González Bergez, que los códigos de fondo no se reglamentan, pero es cierto relativamente. También tiene su razón el señor diputado Vedia al hablar de la reglamentación, porque en gran medida los códigos de fondo son reglamentados por los códigos de procedimiento y, en consecuencia, tratándose de una figura especial con un procedimiento especial, los poderes provinciales deberán introducir en los códigos de procedimientos las medidas necesarias que conduzcan a salvaguardar el derecho de defensa y las condiciones en las cuales se llevará adelante la justificación de las afirmaciones que se hagan en dicho juicio.

Sr. Jofré. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Reñé. — Sí, señor diputado.

Sr. Jofré. — Pido disculpas por interrumpirlo, pero creo que no debe quedar en pie un error gravísimo que acaba de cometer el señor diputado.

Dice que los códigos de procedimientos reglamentan los códigos de fondo. Eso es un grave error. El código de procedimientos pone en movimiento las disposiciones del código de fondo; es el medio del cual se vale la parte que litiga o la justicia cuando actúa de oficio para poner en ejercicio los derechos que establecen los códigos de fondo. Pero de ninguna manera los códigos de procedimientos reglamentan a éstos; la reglamentación es una cosa total y absolutamente distinta.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Reñé?

Sr. Reñé. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Serú García. — Creo que es atinada la observación del señor diputado Jofré, porque además los códigos de procedimientos en ningún caso pueden traer prescripciones que sean integradoras de la figura delictiva. Esto está exclusivamente reservado a los códigos de fondo, y la condición que el señor diputado Reñé pretende sea introducida en los códigos de procedimientos en tanto sería integradora de la figura delictiva, sería absolutamente inconstitucional.

Sr. Reñé. — Agradezco la interrupción de los señores diputados, pero yo no he dicho textualmente que los códigos de procedimientos reglamentan a los códigos de fondo. Dije que en cierta medida, y evidentemente esto se refiere a la parte procesal.

Por otra parte, no he pretendido introducir determinadas características integradoras del

delito. Simplemente me refiero al procedimiento que asegura las garantías de la debida defensa en juicio. Estoy hablando de un caso concreto; es decir, entiendo que si un juez en lo criminal requiere debidamente a un funcionario para que justifique el aumento de su patrimonio, evidentemente no se trata del proceso común, normal, de las otras figuras del código. Entonces, el Código de Procedimientos debe arbitrar la manera, la forma en que debe proceder un funcionario para justificar el incremento de su patrimonio. Me refiero meramente a medidas de carácter adjetivo, formal; no pretendo que los códigos de procedimientos integren la figura delictiva.

Sr. Gómez Machado. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Reñé. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Gómez Machado. — Anoto la buena intención del señor diputado en cuanto a querer asegurar al funcionario la mayor garantía posible. Pero para que exista ese requerimiento de tipo judicial tiene que existir previamente una denuncia. Quiere decir que tendría que ser ya imputado el funcionario para que se produjera el requerimiento de tipo judicial a que alude el señor diputado. Es decir, la existencia del delito sería posterior a la denuncia.

Cuando aquí se habló de interpretación del artículo —y obsérvese que cuando un artículo del Código Penal tiene que ser tan interpretado para saber cómo se tipifica el delito, es sumamente peligroso— se dijo que quedaba librado a la reglamentación respectiva. Evidentemente que no corresponde interpretar como reglamentación a los códigos de procedimientos, de modo que cuando se habló de la reglamentación se hizo referencia indudable al decreto que dicte el Poder Ejecutivo. Anoto al respecto dos incongruencias fundamentales.

La primera se refiere a la reglamentación, que no puede ser por vía de los códigos procesales; y la segunda, al requerimiento judicial, que sólo podría producirse después de la denuncia, es decir cuando el funcionario esté ya imputado. Evidentemente hay que establecer un procedimiento previo que le permita al funcionario justificar su patrimonio ante el requerimiento formal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Reñé.

Sr. Reñé. — Si las palabras mías referentes a la reglamentación causan tanto inconveniente, estoy dispuesto a retirarlas. No quise darles un alcance técnico, sino meramente explicativo.

En cuanto a la otra objeción, referente a que el funcionario debe ser previamente denunciado, me parece que, en efecto, tiene que ser así. Tiene que ser previamente denunciado, porque, si no, no puede ponerse en marcha la acción judicial.

Sr. Gómez Machado. — Quiere decir que la tipificación del delito que surge de la ley da lugar a la denuncia. Habría una imputación y

una denuncia sin que ni siquiera el imputado se hubiera negado a exhibir el origen de sus bienes.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia señala, señor diputado Reñé, que ha expirado el término de que disponía para su exposición.

Sr. Reñé. — Concluyo con dos palabras, señor presidente.

Cualquier delito que se imputa a alguien se lo hace ante la justicia y ese alguien debe concurrir ante ella. No veo qué inconveniente podría causar esto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Creo que de todas estas disquisiciones jurídicas el que estuvo más acertado —y señalo la coincidencia feliz de esta tarde— es el representante de la Federación de Partidos de Centro, que ha puesto las cosas en su verdadero lugar.

¿Qué es lo que incrimina el enriquecimiento ilícito o la negativa a declarar la procedencia de los fondos? Porque está expresado que el funcionario que debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento patrimonial, comete delito. En consecuencia el delito es de carácter formal.

Sr. Llaver. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Caro. — Sí, señor diputado.

Sr. Llaver. — El delito también lo comete el que, requerido para justificar el origen de sus bienes, pretende justificarlo pero no lo puede hacer. Es decir que no es sólo el que se niega a aportar las pruebas...

Sr. Caro. — No lo dice, por de pronto.

Sr. Llaver. — Sí, lo dice, porque si requerido para hacerlo, proporciona medios y elementos de juicio que no resultan suficientemente claros en cuanto al origen de los bienes, incurre también en el delito de enriquecimiento, porque se presume que ese enriquecimiento resulta ilegítimo.

Sr. Caro. — Yo me afirmo cada vez más en la convicción de la estrecha vinculación que existe entre las normas que estamos discutiendo y el derecho administrativo. Creo, honestamente, por alguna pequeña experiencia administrativa que poseo, que sólo con normas de tipo penal no vamos a lograr el objetivo que perseguimos. Si estas normas no se integran con otras del derecho administrativo, como ser las referidas a establecer el punto de partida, o sea el estado patrimonial de la gente en el momento de iniciar la función pública, resultarán ino cuas.

Observen los señores diputados la vaguedad de la redacción del artículo, donde aparece el factor subjetivo, fácilmente influenciable por motivaciones políticas —y esto es muy importante— que juegan un papel tremendo.

El artículo 268⁴ dice que será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabili-

tación absoluta de tres a diez años, el funcionario que debidamente requerido no justificare la procedencia de un aumento excesivo patrimonial... ¿Qué es esto de excesivo? Allí es donde entra a jugar la subjetividad, que puede ser fácilmente presionable por factores ajenos a la tutela del bien jurídico a defender.

Yo me pregunto si un peón que se desempeña en los ferrocarriles o en Vialidad Nacional y que, economizando sobre sus sueldos, logra reunir una cantidad de veinte o de cincuenta mil pesos, puede ser considerado un delincuente, es decir, si es que se puede calificar a su aumento de patrimonio de excesivo. En este ejemplo aparece con toda nitidez un enriquecimiento aparentemente excesivo que pudiera ser punible. Observen los señores diputados que el sistema de la inversión de la prueba va a perjudicar sustancialmente en este caso a los agentes de las categorías inferiores de la administración pública, que son los más negligentes en el cuidado de sus cuentas y papeles.

Le va a ser difícil al peón de mi ejemplo justificar un incremento de patrimonio de veinte mil pesos, pero no le resultará tan dificultoso al que tenga bienes por cinco millones de pesos justificar un aumento de su capital al doble, o simplemente el incremento de uno o dos millones.

Sr. Llaver. — Yo le preguntaría muy brevemente al señor diputado si cree que ha incurrido o no en enriquecimiento ilícito un funcionario con veinte mil pesos de sueldo que tiene dos o tres caballos de carrera y un automóvil, y que efectúa uno o dos viajes a Europa por año.

Sr. Caro. — Es posible que en ese caso el señor diputado tenga razón. Pero en esta terrible duda, entre abogar por el mantenimiento de los principios tradicionales del derecho democrático o abogar por principios que hacen también a la moral pública, prefiero decidirme porque nadie pueda ser tildado de delincuente si no se le prueba que es tal. Es decir, preferiría que se evadieran de las redes de la justicia algunos de estos servidores infieles del Estado, a distorsionar a punto tal principios que son tradicionales en el derecho público argentino y, en general, de Occidente.

Yo no me expido en contra de disposiciones de esta naturaleza, pero creo que deben necesariamente formar parte de una rama del derecho que está cobrando autonomía, cual es la del derecho penal administrativo, y no del Código Penal.

No viene al caso el ejemplo de la ley de la provincia de Buenos Aires que fue traído aquí. No conozco sus disposiciones, pero estoy absolutamente seguro de que no puede disponer privaciones a la libertad por violaciones a sus normas, porque la facultad de dictar el Código Penal pertenece, de acuerdo con la Constitución, al Congreso Nacional.

Puede admitirse el principio de la inversión de la prueba en la esfera administrativa, pero no cuando está en juego el principio de la libertad individual y la defensa en juicio, porque es distinta la violación de las normas administrativas que la violación de las normas penales.

Sr. Sandler. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Caro. — Sí, señor diputado.

Sr. Sandler. — Es para ayudar al señor diputado en su argumentación.

He escuchado con mucha atención las palabras del señor diputado Caro, y creo que está en lo cierto. En el derecho penal debemos reivindicar, como principio básico de la libertad, el concepto de la culpa. Y en el inciso que estamos considerando yo advierto que se estatuye una especie de responsabilidad objetiva, simplemente por el hecho de no justificarse una conducta no delictiva. De ese modo, la torpeza o la negligencia de no haber sabido guardar en su hora todos los documentos probatorios necesarios, podría constituirse en delito. No ha habido dolo en este caso sino imprudencia, pero no obstante podría ser penado con dos años de prisión.

Esta responsabilidad objetiva es perfectamente procedente en el derecho civil o comercial, pero no procede en el orden penal, porque en éste debe preservarse principalmente la libertad.

Sr. Caro. — Muy bien; pero quiero advertirle que en el Código Civil existe el artículo 2.412, que hace a la presunción de buena fe de la posesión de una cosa mueble, sobre la cual se asienta la seguridad de las transacciones. Estoy seguro de que si al noventa por ciento de los habitantes se le exigiera que justificara la procedencia de cualquier tipo de bien, la mayoría estaría en la imposibilidad material de hacerlo. Por eso la ley cubre con una presunción de licitud todos los actos humanos, salvo la prueba en contrario, que debe estar a cargo de quien alegue lo contrario. Estos son los principios tradicionales que hacen a la seguridad jurídica y que sirven a los fines de la libertad.

Yo no me voy a oponer; personalmente he luchado contra este tipo de acciones dentro de la esfera de mis posibilidades. Siendo constituyente en la provincia de Salta, logré que se incorporara una cláusula denegando la excarcelación para quienes delinquieran contra el patrimonio de la administración pública; pero quisiera que la sanción del Congreso tuviera la racionalidad necesaria, y en ese sentido encuentro más congruente el despacho del bloque socialista argentino.

Rogaría que hasta tanto eso se haga, la comisión revea su actitud y suprima, lisa y llanamente, el inciso que estamos considerando.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Sin duda alguna, cualquier disposición que tienda a reprimir el enriqueci-

miento ilícito de los funcionarios públicos tiene que ser vista con una gran simpatía; pero tampoco podemos —por más deseos que tengamos de evitar lo que se ha visto a través de todos los tiempos, de gente que delinque y se enriquece ilícitamente— dictar normas que puedan romper con la tradición jurídica del país y con los principios más elementales que rigen en materia penal.

En esta disposición —como muy bien lo ha señalado el señor diputado Bilbao— estamos introduciendo figuras jurídicas distintas de las que rigen en materia penal en el país y, lo que es más grave —y debo señalarlo en esta oportunidad para que no nos sorprendamos después cuando los tribunales declaren la inconstitucionalidad de esta parte del Código Penal que estamos reformando—, distintas de las disposiciones expresas de la Constitución Nacional.

De acuerdo con lo que establece este artículo, se va a exigir al funcionario que demuestre un hecho que se le imputa; se le va a exigir que declare contra sí mismo; se le va a exigir que pruebe que no se ha enriquecido ilícitamente. ¿Y qué establece la Constitución, de la que nos estamos olvidando un poco? Dice el artículo 18: «Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.»

¿Qué otra cosa que no sea declarar contra sí mismo significa exigir a un funcionario público, después de cumplida su función, y hasta ocho, diez o quince años después, que diga qué es lo que ha hecho para enriquecerse y por qué se ha enriquecido? Se le exige declarar contra sí mismo, vale decir se está violando una disposición constitucional.

Por otra parte, ¿cómo se va a poder instrumentar esta prueba? Se va a exigir del funcionario que acredite no haberse enriquecido. Pero, ¿qué es lo que se debe tener como base para justificar que se ha enriquecido o no? ¿En qué nos vamos a apoyar para decir que todos o cada uno de los señores diputados —que también van a entrar dentro de esta disposición—, o todos los funcionarios públicos se han enriquecido? ¿Con respecto a qué fecha? ¿A la fecha del ingreso a la administración? ¿Cuál era el patrimonio auténtico en ese momento? ¿No se prestará eso a disimulos o inconvenientes de toda naturaleza? Por eso creo que es indispensable, antes de sancionar una disposición como ésta, crear el registro de funcionarios públicos. En ese sentido, el que habla ha presentado un proyecto orgánico, que coincide en gran parte con el de la bancada socialista y que, por otra parte, es reproducción de uno que presentó un hombre de nuestras filas, que fue el primero que elaboró un proyecto orgánico de esta naturaleza, con la creación de un registro para empleados y funcionarios públicos y con penalidades muy gra-

ves. Me refiero al proyecto del doctor Rodolfo Corominas Segura, ex gobernador de Mendoza y diputado nacional por esa provincia.

De manera que antes de establecer disposiciones que castiguen a quienes no justifiquen debidamente su enriquecimiento debemos fijar una fecha tope como punto de partida, a los efectos de determinar si se ha producido o no el enriquecimiento ilícito. De otra manera, estaremos improvisando.

Además, ¿quién va a hacer el requerimiento que establece el artículo 268? El artículo dice «debidamente requerido». No comparto la opinión del señor diputado Reñé de que solamente debe hacerlo el juez en lo penal. ¿Por qué ha de ser así? ¿En qué parte de la ley dice que sólo ese juez debe hacer el requerimiento? En el caso de los cheques, por ejemplo, el que requerido no pagare el cheque dentro de las veinticuatro horas comete un delito. Y no es el juez el que lo requiere, sino el propio interesado a quien se le ha entregado el cheque. ¿Por qué no puede ser que el día de mañana se interprete que cualquier ciudadano pueda enviar un telegrama colacionado a un funcionario público, ocho o diez años después que ha estado en funciones, o al día siguiente de haberse retirado de ellas?

Sr. Sandler. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Jofré. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Sandler. — En apoyo de los argumentos del señor diputado, precisamente creo que no puede ser el juez quien requiera, porque el delito —en caso de aprobarse esta figura— se configuraría luego de que, habiendo sido requerido el funcionario, no justificare su patrimonio. Rección entonces se integraría la figura jurídica.

En el supuesto previsto por la ley, cualquiera podría requerirlo, menos el juez. Este debe tomar participación una vez que, requerido el funcionario por quien deba hacerlo, no haya justificado su patrimonio. Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Le agradezco la interrupción al señor diputado. Coincido totalmente con su punto de vista.

Supongamos, además, que se considere que este delito prescribe, como es lógico y natural, como legalmente corresponde, dentro del plazo de la pena máxima. Como la prisión es por seis años, podría prescribir en ese plazo. Pero también se podría interpretar que, como la otra pena, la de inhabilitación, es por diez años, la prescripción se produciría en ese lapso. ¿Qué pasaría? Puede ocurrir que dos o tres días antes de vencer los diez años —o los seis años— se hiciera el requerimiento. Es desde ese momento cuando se empezará a cometer el delito.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Serú García. — Hay otra observación en abono de su tesis. No creo que pueda empezar a correr la prescripción sino desde el momento en que ha sido hecho el requerimiento. Recién cuando el requerido se niega a dar explicaciones es que se constituye la figura delictiva, lo cual equivale a decir que dicho requerimiento podría formularse, por ejemplo, cuarenta y cinco años después que el funcionario haya cesado en su cargo.

Sr. Jofré. — Eso es justamente lo que estaba sosteniendo.

Sr. Maglietti. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Maglietti. — Entiendo que debe ser a partir del momento en que se produce el enriquecimiento indebito.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — No se puede aceptar esa tesis, porque no sabemos, sin la existencia del registro previo, en qué momento el funcionario se ha enriquecido.

Así, no podemos saber si un ministro que está seis años en sus funciones y maneja muchos millones de pesos, se ha enriquecido ilícitamente en un determinado momento. Ello sólo puede conocerse en el instante en que se lo emplaza para que demuestre que no se ha enriquecido ilícitamente y si en ese momento se comprueba la existencia del delito, la prescripción comienza a computarse a partir de entonces.

Hay que tener en cuenta otra circunstancia. Si el requerimiento se le hace ocho o diez años después de haber cesado en su función es posible que el funcionario de buena fe carezca de los elementos necesarios para justificarse, porque generalmente los hombres que actúan de esta manera son los menos previsores. En cambio, el delincuente, el que va a la función pública con el mezquino propósito de enriquecerse, generalmente adopta los recaudos para justificar todos los extremos que el artículo establece.

Tenemos que ser precavidos al crear la nueva figura jurídica como la que contiene el despacho. Se sostiene que el funcionario debe ser requerido por el juez del crimen. Sabemos lo que ocurre en la realidad de este país, en que a veces las transformaciones políticas fomentan las persecuciones, como ha ocurrido en todos los tiempos. Un ciudadano de mala fe o con propósito persecutorio, podrá hacerle un emplazamiento a otra persona mediante un telegrama colacionado o por cualquier otro medio para que justifique el enriquecimiento que ha tenido. Si no existe el registro, se van a presentar problemas de gravedad inusitada con este tipo de procedimientos.

El artículo, en la forma en que ha sido propuesto, se prestará también a las denuncias anónimas. El señor diputado Llaver ha hecho referencia al juicio de residencia que se hacía a los virreyes, oidores y capitanes generales en América, que tenía un procedimiento muy semejante al del despacho y que no dio nunca resultado. Se efectuaban en el lugar de residencia a los funcionarios que actuaban lejos del rey, quienes tenían que demostrar que no se habían enriquecido. Pero sucedía que los funcionarios tenían sus paniaguados, y por eso en la historia de Indias vemos muchos de los prevaricatos más grandes en esta América tan generosa y rica.

También se presentará un problema similar al que ocurría en la Venecia de los *duxes*. Quien visita el palacio de los *duxes* encuentra en una de sus grandes salas, sobre una de las paredes, un magnífico león con la boca abierta, esculpido en uno de los muros, que representa el signo de los *duxes*. En esa boca abierta era donde los amigos y los propios funcionarios del *dux*, anónimamente, al abandonar la residencia luego de estar con el *dux*, en ese león, colocaban con sigilo sus denuncias. Ellas eran recibidas por los investigadores, que aceptaban esas denuncias de los incapaces de afrontar la responsabilidad de hacerlas a cara descubierta.

Creo que para que verdaderamente nosotros podamos hacer una limpieza en la administración pública, tenemos que castigar severamente los delitos de enriquecimiento.

En segundo lugar, tenemos que hacer un registro orgánico. Tratemos el registro propuesto por el bloque socialista, o el que propone el diputado que habla, o el de cualquiera de los proyectos que se han presentado; pero hagámoslo orgánica y rápidamente, en forma simultánea con las modificaciones del Código, y de ese modo vamos a castigar a los deshonestos.

Todos, sin duda alguna, queremos castigar a los deshonestos; pero castiguémoslos bien, y no con disposiciones que en el primer juicio que se plantee sean declaradas inconstitucionales.

3

MOCIONES

Sr. Schaposnik. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

Sr. Schaposnik. — Hago indicación de que, con el asentimiento de toda la Honorable Cámara, se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 14.

Sr. Bobillo. — Pido la palabra para una indicación previa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una indicación previa, tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Formulo indicación en el sentido de que, teniendo en cuenta que en el día de hoy no se ha realizado sesión de tablas, se autorice a la Presidencia a girar a las respectivas comisiones los asuntos entrados que se encuentran en la Secretaría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con el asentimiento de la Honorable Cámara, se girarán a comisión los asuntos entrados.

Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio hasta mañana a las 14.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 23 y 5.

4

APENDICE

ASUNTOS ENTRADOS

I

Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1964.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, sometiendo a su consideración

el adjunto proyecto de ley, mediante el cual se propicia la reimplantación del grado de inspector mayor, en los cuadros del personal superior de la Policía Federal —escalafones de seguridad, bomberos y comunicaciones—, y sistema de promoción a su respecto, con carácter excepcional, como régimen de transición.

Esa jerarquía adquirió vivencia institucional y legal con la sanción del primitivo Estatuto de la Policía